

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO P/IFT/160616/305

DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU XVII SESIÓN ORDINARIA DEL 2016, CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2016.

LEYENDA DE LA CLASIFICACIÓN

Fecha de Clasificación: 24 de junio de 2016. **Unidad Administrativa:** Secretaría Técnica del Pleno, por contener información **Confidencial**, de acuerdo con los artículos 106, 107 y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ("LGTAIP"), conforme a la versión pública elaborada por la Dirección General de Sanciones y remitida por correo electrónico el 23 de junio de 2016.

Núm. de Resolución	Descripción del asunto	Fundamento legal	Motivación	Secciones Confidenciales
P/IFT/160616/305	Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones impone multa y declara la pérdida de bienes en beneficio de la Nación, derivado del procedimiento administrativo iniciado en contra del C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de responsable de las instalaciones y equipos de radiodifusión operando la frecuencia 98.1 MHz, en el Municipio de Luvianos, Estado de México, sin contar con la respectiva concesión, permiso o autorización.	Confidencial con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, así como el Trigésimo Octavo fracción I del "Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016.	Contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.	Páginas 1-7, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 23-35, 37-45, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 64,-69 y 75-80.

VERSIÓN PÚBLICA, de conformidad con los artículos 23 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 47, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y Lineamiento Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.



EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DE
RADIODIFUSIÓN IDENTIFICADA COMO "LA CALENTANA
MEXIQUENSE" QUE OPERABA LA FRECUENCIA 98.1 MHZ
EN EL MUNICIPIO DE LUVIANOS, ESTADO DE MÉXICO.

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.- Visto para resolver el expediente E-IFT,UC,DG-SAN.0005/2016-V, formado con motivo del procedimiento administrativo de imposición de sanciones y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, iniciado mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil dieciséis y notificado el once de marzo del mismo año por conducto de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "IFT" o "Instituto"), en contra de [REDACTED]

[REDACTED] en su calidad de responsable de la estación de radiodifusión identificada como "LA CALENTANA MEXIQUENSE" que operaba la frecuencia 98.1 MHz en el inmueble ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] por la probable violación a lo previsto en el artículo 66 en relación con el 75, y la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo subsecuente, la "LFTyR"). Al respecto, se emite la presente Resolución de conformidad con lo siguiente, y

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del "IFT" el veinticuatro de junio de dos mil quince, se denunció que en el domicilio ubicado en Av. Cuauhtémoc sin número conocido a unos metros del municipio de Luvianos, Estado de México, existía una estación de radiodifusión sonora presuntamente clandestina propiedad de los CC. [REDACTED]

ELIMINADAS cuarenta palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción IV y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

ELIMINADAS una palabra y dos renglones respectivamente con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Identificada como **CALENTANA MEXIQUENSE** que opera en la banda de Frecuencia Modulada (FM) **98.1 MHz**.

SEGUNDO. En virtud de lo anterior, el seis de octubre de dos mil quince, personal adscrito a la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico (en lo sucesivo "**DGAVER**") en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (a efectos únicamente de resguardar la seguridad del personal del IFT que realizó los trabajos de radiomonitorio) y con apoyo de una Unidad Móvil de Comprobación Técnica de Emisiones Radioeléctricas "**Argus**", realizó trabajos de radiomonitorio y vigilancia del espectro radioeléctrico en las inmediaciones de la población de Luvianos, Estado de México, con el propósito de localizar y ubicar el sitio de origen de las emisiones radioeléctricas denunciadas, comprobando que la operación de la frecuencia **98.1 MHz** provenía del inmueble particular ubicado

TERCERO. Derivado de lo anterior, personal adscrito a la Dirección General de Verificación (en lo sucesivo "**DGV**") se avocó a la búsqueda en la infraestructura de estaciones de Frecuencia Modulada de la página de Internet del Instituto¹, con el objeto de constatar si la frecuencia **98.1 MHz** en el Municipio de Luvianos, Estado de México, se encontraba registrada, sin embargo, de dicha búsqueda no se advirtió registro alguno respecto de dicha frecuencia.

Asimismo, con las coordenadas geográficas proporcionadas por la **DGAVER**, y con el apoyo de la tecnología cartográfica contenida en la herramienta software denominada **Google Earth**, se identificó la ubicación del inmueble donde presuntamente se encontraba instalada la estación de radiodifusión operando en la frecuencia **98.1 MHz**.

¹ Visible en:

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/infraestructurafm28-04-15_1.pdf

ELIMINADAS un renglón, y diecisiete palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

CUARTO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/4194/2015 de quince de octubre de 2015, la DGV dependiente de la Unidad de Cumplimiento del IFT, ordenó la visita de inspección-verificación IFT/DF/DGV/1007/2015 al propietario, y/o poseedor y/o responsable, y/o encargado del inmueble, instalaciones y equipos de radiodifusión que opera la frecuencia 98.1 MHz, en el domicilio ubicado en

[REDACTED] con el objeto de "...constatar y verificar si los equipos y/o sistemas de radiodifusión y/o servicios de radiodifusión de LA VISITADA operan en la frecuencia 98.1 MHz y en su caso si cuenta con instrumento legal vigente emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que justifique su uso legal...".

QUINTO. El quince de octubre de dos mil quince, en cumplimiento al oficio precisado en el resultando inmediato anterior, los C.C. Alejo Reyes Ramírez y Marco Antonio Esquivel Medina (en lo sucesivo "LOS VERIFICADORES") se constituyeron en el domicilio precisado, levantándose el acta verificación ordinaria número IFT/DF/DGV/1007/2015 (en lo sucesivo el "ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA"), en la cual se hizo constar que en el inmueble ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] se detectaron equipos de radiodifusión operando en la frecuencia 98.1 MHz sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente.

SEXTO. Del contenido del acta de verificación precisada en el resultando anterior, se desprende que la persona que atendió la visita se negó a proporcionar su nombre y manifestó bajo protesta de decir verdad "que el propietario de la estación es el [REDACTED] y el solo es locutor", sin exhibir

ELIMINADAS dos palabras, un renglón, y diecisiete palabras respectivamente con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

ningún documento para identificarse, toda vez que manifestó que: "no tiene ninguna identificación".

SÉPTIMO. Mediante oficio IFT/225/UC/DGA-VESRE/804/2015 de veintidós de noviembre de dos mil quince, la **DGAVER** remitió administrativamente a la **DGV** los resultados de los trabajos de radiomonitorio y vigilancia señalados en el resultando **SEGUNDO** que antecede, en los cuales se aprecia el informe de radiomonitorio número IFT/415/2015 del que se desprende que la emisión de la frecuencia **98.1 MHz.**, provenía del inmueble ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] al tenor de las siguientes coordenadas [REDACTED] domicilio en donde se localizó una torre estructural de aproximadamente dieciocho metros de altura sobre el nivel de la azotea y sobre la misma un elemento radiador omnidireccional del que se origina la citada emisión.

OCTAVO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/0126/2016 de quince de enero de dos mil dieciséis, la **DGV** remitió al Titular de la Unidad de Cumplimiento un "Dictamen por el cual se propone el inicio de **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES** y la **DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN**, en contra del C. [REDACTED] en su carácter de propietario de la estación de radiodifusión identificada como "LA CALENTANA MEXIQUENSE", que operaba en la frecuencia **98.1 MHz**, en el Municipio de Luvianos, Estado de México, por la presunta infracción del artículo 66 en relación con el artículo 75, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de la visita de Inspección y verificación que consta en el Acta Verificación número IFT/DF/DGV/1007/2015."

ELIMINADAS veintitrés palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

NOVENO. En virtud de lo anterior, por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, el Instituto por conducto del Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en contra de [REDACTED] PROPIETARIO DE LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN IDENTIFICADA COMO "LA CALENTANA MEXIQUENSE" QUE OPERABA LA FRECUENCIA 98.1 MHZ EN EL MUNICIPIO DE LUVIANOS, localizada en el inmueble ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED], por presumirse la infracción al artículo 66 en relación con el 75, y la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la LFTyR, ya que de la propuesta de la DGV, se tuvieron elementos suficientes para acreditar la prestación del servicio de radiodifusión a través de la operación, uso y explotación de una vía general de comunicación (espectro radioeléctrico) consistente en la frecuencia 98.1 MHz por parte del presunto responsable, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, de conformidad con lo establecido en la LFTyR.

DÉCIMO. El once de marzo de dos mil dieciséis, personal de este Instituto acudió al domicilio que ha quedado precisado en el numeral previo anterior, a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionatorio, y en dicho domicilio el notificador fue atendido por una persona de nombre [REDACTED] quien manifestó en ese acto ser "cuñado del probable responsable", por lo que en tal sentido se notificó el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, concediéndole un plazo de quince días, para que en uso del beneficio de la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "CPEUM") y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en adelante "LFPA") de aplicación supletoria en

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

términos del artículo 6, fracción IV, de la **LFTyR**, expusiera lo que a su derecho conviniera y, en su caso aportara las pruebas con que contara.

El término concedido en el acuerdo de inicio para presentar manifestaciones y pruebas transcurrió del catorce de marzo al ocho de abril de dos mil dieciséis, sin considerar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo, dos y tres de abril del de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos en términos del artículo 28 de la **LFPA**, asimismo, sin considerar los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil dieciséis por haber sido suspendidas las labores de este Instituto en términos del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año 2016 y principios de 2017" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil quince.

DÉCIMO PRIMERO. De las constancias que forman el presente expediente se observó que, [REDACTED] por su propio derecho, presentó escrito de manifestaciones y pruebas ante la oficialía de partes de este Instituto el ocho de abril de dos mil dieciséis, el cual fue presentado dentro del plazo de quince días que le fue otorgado para tal efecto.

Por lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de abril del presente año, notificado el veintidós de abril de dos mil dieciséis se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por [REDACTED] y por corresponder al estado procesal que guardaba el presente asunto, con fundamento en el artículo 56 de la **LFPA**, se pusieron a su disposición los autos del presente expediente para que, dentro del término de diez días hábiles formulara alegatos, en el entendido que

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitiría la Resolución que conforme a derecho correspondiera.

DÉCIMO SEGUNDO. El término concedido a [REDACTED] para presentar alegatos transcurrió del veinticinco de abril al nueve de mayo de dos mil dieciséis, lo anterior sin considerar los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, primero, siete y ocho de mayo de dos mil dieciséis por ser sábados y domingos, en términos del artículo 28 de la LFPA.

Mediante escrito presentado ante la oficina de partes del Instituto el nueve de mayo de dos mil dieciséis, [REDACTED] presentó sus alegatos, por lo que mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil dieciséis, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto en la misma fecha, se tuvo por presentado su escrito de alegatos y por lo tanto fue remitido el presente expediente a este órgano colegiado para la emisión de la Resolución que conforme a derecho resulte procedente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El Pleno del Instituto es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafos, décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la CPEUM; 1, 2, 6, fracciones II, IV y VII, 7, 15, fracción XXX, 17, penúltimo y último párrafos, 66, 75, 297, primer párrafo, 298, inciso E), fracción I, y 305 de la LFTyR; 523 y 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación ("LVGC"); 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16 fracción X, 28, 49, 50, 59, 70, fracciones II y VI, 72, 73, 74 y 75 de la

LFPA; y 1, 4, fracción I y 6, fracción XVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones ("ESTATUTO").

SEGUNDO. CONSIDERACIÓN PREVIA

La Soberanía del Estado sobre el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, que es el medio en el que se propagan las señales de audio o audio y video asociados mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones de radio y televisión se ejerce observando lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la CPEUM, los cuales prevén que el dominio directo de la Nación sobre el espectro radioeléctrico es inalienable e imprescriptible y que la explotación, uso o aprovechamiento de dicho recurso por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, sólo puede realizarse mediante títulos de concesión otorgados por el IFT de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la CPEUM, el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones; para lo cual tiene a su cargo, entre otros, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Conforme a lo anterior, el Instituto es el encargado de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en las concesiones y autorizaciones que se otorguen para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del

ELIMINADAS cinco palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



espectro radioeléctrico, dedicadas al servicio público de radiodifusión como vehículo de información y de expresión, a fin de asegurar que se realice de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Bajo esas consideraciones, el ejercicio de las facultades de supervisión y verificación por parte del IFT, traen aparejada la relativa a imponer sanciones por el incumplimiento a lo establecido en las leyes correspondientes o en los respectivos títulos de concesión, asignaciones o permisos, con la finalidad de inhibir aquellas conductas que atenten contra los objetivos de la normatividad en la materia.

En ese sentido, la Unidad de Cumplimiento en ejercicio de sus facultades, llevó a cabo la sustanciación de un procedimiento y propuso a este Pleno imponer la sanción respectiva, así como declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación en contra de [REDACTED] al considerar que con su conducta violó los artículos 66 en relación con el 75 y se actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la LFTyR.

Ahora bien, para determinar la procedencia en la imposición de una sanción, la LFTyR aplicable en el caso en concreto, no sólo establece obligaciones para los concesionarios y permisionarios y para los gobernados en general, sino también señala supuestos de incumplimiento específicos, así como las consecuencias jurídicas a las que se harán acreedores en casos de infringir la normatividad en la materia.

Es decir, al pretender imponer una sanción, esta autoridad debe analizar minuciosamente la conducta que se le imputa a [REDACTED]

ELIMINADAS cuatro palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

██████████ y determinar si la misma es susceptible de ser sancionada en términos del precepto legal o normativo que se considera violado.

En este orden de Ideas, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el desarrollo jurisprudencial de los principios del derecho penal en el campo administrativo sancionador irá formando los principios propios para este campo del *ius puniendi* del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido considerar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal, como lo es el principio de inaplicabilidad de la analogía en materia penal o tipicidad.

En ese sentido, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal al ser manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de éstos, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, debe cuidarse el aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

Así, en la especie se considera que la conducta desplegada por ██████████ vulnera el contenido del artículo 66 de la propia Ley, que al efecto establece que se requiere de concesión única otorgada por el IFT para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Desde luego, el mencionado precepto dispone lo siguiente:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Lo anterior, en relación con el artículo 75, de la LFTyR, el cual dispone que corresponde al Instituto el otorgamiento de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, para efectos de imponer la sanción que corresponda, resulta importante hacer notar que la comisión de la conducta antes referida, es susceptible de ser sancionada en términos de la fracción I, del inciso E del artículo 298, de la LFTyR, en el que se establece que la sanción que en su caso procede imponer corresponde a una multa por el equivalente al 6.01% hasta el 10% de los ingresos acumulables de la persona infractora.

En efecto, el artículo 298, inciso E), fracción I, de la LFTyR, establece lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización...

Asimismo, cabe señalar que la comisión de la conducta en análisis, actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la LFTyR, misma que establece que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión trae como consecuencia la pérdida de los bienes en beneficio de la Nación. En efecto dicho precepto legal expresamente establece:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

De lo anterior, podemos concluir que el principio de tipicidad sólo se cumple cuando en una norma consta una predeterminación tanto de la infracción como de la sanción, es decir que la ley describa un supuesto de hecho determinado que permita predecir las conductas infractoras y las sanciones correspondientes para tal actualización de hechos, situación que se hace patente en el presente asunto.

Por otra parte, resulta importante mencionar que para el ejercicio de la facultad sancionadora, en el caso de incumplimiento de las disposiciones legales en materia de radiodifusión, el artículo 297, primer párrafo, de la LFTyR establece que para la imposición de las sanciones previstas en dicho cuerpo normativo, se estará a lo previsto por la LFPA, la cual prevé dentro de su Título Cuarto, Capítulo Único, el procedimiento para la imposición de sanciones administrativas.

En efecto, los artículos 70 y 72 de dicho ordenamiento, establecen que para la imposición de una sanción, se deben cubrir dos premisas: i) que la sanción se encuentre prevista en la ley y ii) que previamente a la imposición de la misma, la autoridad competente notifique al presunto infractor el inicio del procedimiento respectivo, otorgando al efecto un plazo de quince días para que el presunto infractor exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Así las cosas, al iniciarse el procedimiento administrativo de Imposición de sanción en contra de [REDACTED] se presumió el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR ya que no contaba con la concesión correspondiente para la prestación del servicio público de radiodifusión, mediante el uso de la frecuencia 98.1 MHz.

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



En este sentido, a través del acuerdo de inicio de procedimiento, la Unidad de Cumplimiento dio a conocer a [REDACTED] la conducta que presuntamente viola disposiciones legales, así como la sanción prevista en ley por la comisión de la misma.

Por ello, se le otorgó un término de quince días hábiles para que en uso de su garantía de audiencia rindiera las pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera. Lo anterior de conformidad con el artículo 14 de la CPEUM, en relación con el artículo 72 de la LFPA.

Concluido el periodo de pruebas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la LFPA, la Unidad de Cumplimiento puso las actuaciones a disposición del interesado, para que éste formulara sus alegatos.

Una vez desahogado el periodo probatorio y vencido el plazo para formular alegatos, la Unidad de Cumplimiento remitió el expediente de mérito en estado de Resolución al Pleno de este Instituto, quien se encuentra facultado para dictar la Resolución que en derecho corresponda.

Bajo ese contexto, el procedimiento administrativo de imposición de sanciones que se sustancia se realizó conforme a los términos y principios procesales que establece la LFPA consistentes en: i) otorgar garantía de audiencia al presunto infractor; ii) desahogar pruebas; iii) recibir alegatos, y iv) emitir la resolución que en derecho corresponda.²

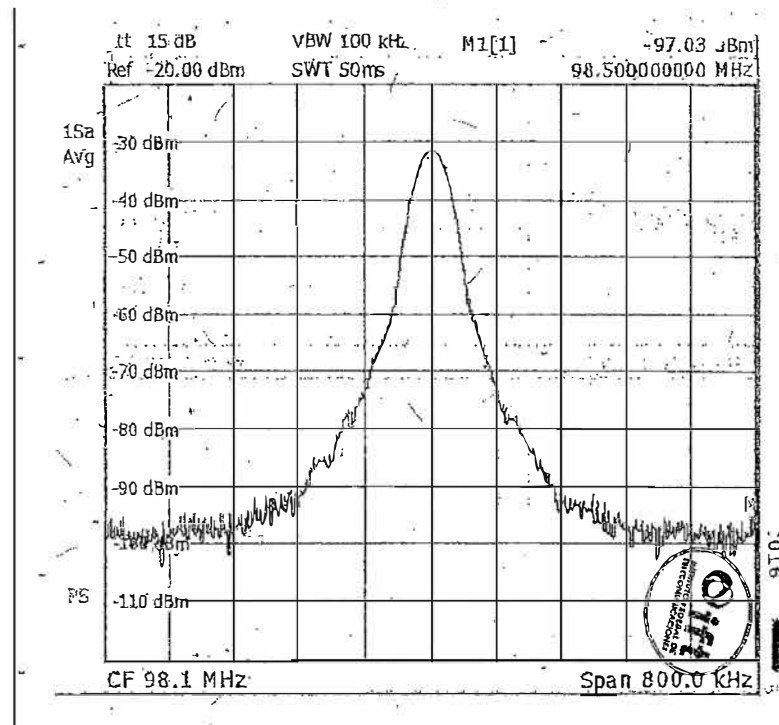
En las relatadas condiciones, al tramitarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción bajo las anteriores premisas, debe tenerse por satisfecho el cumplimiento de lo dispuesto en la CPEUM, las leyes ordinarias y los criterios

² Dichos principios tienen su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen la garantía de debido proceso.

judiciales que señalan cuál debe ser el actuar de la autoridad para resolver el presente caso.

TERCERO. HECHOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN Y DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN.

Atendiendo a la denuncia presentada ante el Instituto el veinticuatro de junio de dos mil quince, el seis de octubre de dos mil quince en la población de Luvianos, Estado de México, se realizó un monitoreo de radiofrecuencia en FM corroborando que la frecuencia 98.1 MHz estaba siendo utilizada, obteniéndose gráficas de radiomonitorio y grabación del audio de las transmisiones. Asimismo, a través del mismo analizador de espectro, se determinó la ubicación exacta de la estación de radiodifusión que operaba dicha frecuencia.



ELIMINADAS trece palabras, un renglón y doce palabras respectivamente con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de Inspección-Verificación IFT/DF/DGV/1007/2015 de quince de octubre de dos mil quince, dirigida al **"PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR, Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DEL INMUEBLE UBICADO EN:** [REDACTED]

[REDACTED] *así como de las instalaciones y equipos de radiodifusión localizados en el mismo*", en esa misma fecha LOS VERIFICADORES se constituyeron en el domicilio ubicado en [REDACTED] [REDACTED] (lugar de origen de la señal) y levantaron el acta de verificación ordinaria número IFT/DF/DGV/1007/2015.

Una vez que LOS VERIFICADORES se constituyeron en el domicilio en el cual se localizó en operación la frecuencia 98.1 MHz, solicitaron la identificación de la persona que recibió la visita, quien se negó a proporcionar su nombre y manifestó bajo protesta de decir verdad *"que el propietario de la estación es el C. [REDACTED] [REDACTED] y el solo es el locutor"* quien además se negó a firmar copia de constancia de acuse de recibo de la orden de visita de Inspección-Verificación IFT/DF/DGV/1007/2015 toda vez que manifestó: *"si lo recibe pero que no va a firmar, por instrucciones del Señor [REDACTED]"* y ante la negativa de designar testigos de asistencia, LOS VERIFICADORES nombraron a los CC. Daniel Pérez Mérida y Pedro Daniel Reyes Gómez, quienes aceptaron tal cargo.

Una vez cubiertos los requisitos de ley, LOS VERIFICADORES, acompañados de la persona que ocupaba el inmueble en el que se practicó la diligencia y de los dos testigos de asistencia, procedieron a verificar las instalaciones de la radiodifusora (según se desprende del reporte fotográfico de las instalaciones ubicadas en el inmueble visitado) y encontraron instalados y en operación: una antena omnidireccional en la azotea del inmueble, sobre un mástil con una línea de

transmisión y en el interior del cuarto un transmisor en la frecuencia 98.1 MHz conectado a diversos equipos.

Posteriormente, **LOS VERIFICADORES** solicitaron a la persona que atendió la visita, manifestara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- Que señalara qué persona es el propietario o poseedor de la estación de radiodifusión que transmite desde ese inmueble, a lo que la persona que recibió la visita respondió: "yo solo soy el locutor."
- Indicara si sabía si desde ese inmueble se estaba transmitiendo una estación de radiodifusión, la cual opera la frecuencia 98.1 MHz, a lo que la persona que recibió la visita contestó que "sí".

Por lo anterior, se le solicitó a dicha persona informara si cuenta con concesión o permiso expedido por la Autoridad Federal que amparara la instalación y operación de la frecuencia 98.1 MHz, ya que en términos del artículo 66 de la LFTyR, se requiere de concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, a lo que la visitada manifestó que no sabía; motivo por el cual **LOS VERIFICADORES** requirieron a la persona que atendió la visita que apagara y desconectara los equipos con los cuales transmitía en la frecuencia antes referida, sin que la persona que atendió la diligencia realizara alguna manifestación.

En razón de que dicha persona no exhibió el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia 98.1 MHz, **LOS VERIFICADORES** procedieron al aseguramiento del equipo encontrado en el inmueble en donde se practicó la

visita, quedando como interventor especial (depositario) del mismo, **RAÚL LEONEL MULHIA ARZALUZ**, quien aceptó y protestó el cargo, situación que se hizo constar en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA**, conforme a lo siguiente:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Antena (omnidireccional)	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	124
Lap Top	HP	Sin modelo	Sin número de serie	125
Transmisor (de fabricación nacional)	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	126
Mezcladora	HENYX	Sin modelo	Sin número de serie	127
Mezcladora	AUTEC	Sin modelo	Sin número de serie	
Tres Micrófonos	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	128
CPU	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	129

Previamente a la conclusión de la diligencia, en términos del artículo 68 de la **LFPA**, **LOS VERIFICADORES** informaron a la persona que recibió la visita, que le asistía el derecho de manifestar lo que a sus intereses conviniera, respecto de los hechos asentados en el acta de verificación, sin que dicha persona realizara alguna manifestación.

Dado lo anterior, **LOS VERIFICADORES** con fundamento en el artículo 524 de la **LVGC** notificaron a la persona que recibió la diligencia, que tenía un plazo de diez días hábiles para que en ejercicio de su garantía de audiencia presentara por escrito las pruebas y defensas que estimara procedentes ante el Instituto.

El término de diez días hábiles otorgado a la visitada para presentar pruebas y defensas en relación a los hechos contenidos en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA** transcurrió del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil quince, término que feneció sin que se presentara escrito alguno.

Derivado de lo anterior y una vez analizadas las constancias respectivas, la DGV estimó que con su conducta el probable responsable presumiblemente contravino lo dispuesto por el artículo 66 en relación con el 75, y actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, ambos de la LFTyR. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

A) Artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR.

El artículo 66 de la LFTyR, establece que: "*Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.*"

Por su parte el artículo 75 de la LFTyR, dispone que "*Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título.*"

En este sentido, dicha concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, es el título habilitante que otorga a su titular la legitimación para prestar servicios de radiodifusión. Sin embargo, del informe de radiomonitorio así como de las grabaciones de audio realizadas por **LOS VERIFICADORES**, se demuestra fehacientemente que el probable responsable, al momento de la diligencia, se encontraba prestando el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **98.1 MHz** de la banda de

3

ELIMINADAS trece palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



Frecuencia Modulada en el domicilio ubicado en [REDACTED] sin contar con el documento idóneo que ampare la prestación de dicho servicio.

Asimismo, con motivo del monitoreo realizado en dicho domicilio, se constató que el uso de la frecuencia **98.1 MHz** no estaba registrada a concesionario o autorizado alguno para esa entidad, dentro de la infraestructura de Estaciones de Radio **FM** publicada en la página web del Instituto.

Ahora bien, de los hechos que se hicieron constar en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA** durante el desarrollo de la visita de inspección-verificación, se desprende lo siguiente:

- a) En el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA** se hizo constar el uso de la frecuencia **98.1 MHz**, mediante una antena omnidireccional colocada en la azotea del inmueble, sobre un mástil con una línea de transmisión así como de un transmisor (de fabricación nacional) sin marca, modelo ni número de serie, una Laptop HP sin modelo ni número de serie, dos mezcladoras marca HENYX y AUTECH sin modelo ni número de serie, tres micrófonos sin marca ni modelo y un CPU sin marca modelo ni número de serie, mismos que se encontraban instalados y en operación, con lo que se acredita el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, correspondiente a la banda de **FM**, sin contar con concesión o permiso.
- b) Del monitoreo realizado, así como de las grabaciones realizadas de la transmisión al momento de la diligencia se constata que se encontraba prestando servicios de radiodifusión mediante el uso de la frecuencia **98.1 MHz** en la banda de FM.

- c) En cuanto al cuestionamiento de LOS VERIFICADORES, respecto a que si contaba con concesión o permiso, para el uso de la frecuencia 98.1 MHz en la banda de FM, la persona que atendió la diligencia manifestó que desconocía si se contaba con alguno de ellos.

Por tanto, se acredita la infracción al artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR, toda vez que al momento de llevarse a cabo la visita de inspección-verificación, se detectó que en el inmueble visitado, se prestaba el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 98.1 MHz de FM, sin contar con la respectiva concesión, permiso o autorización emitida por autoridad competente.

B) Artículo 305 de la LFTyR.

En lo que respecta al artículo 305 de la LFTyR, dicha disposición establece que "Las personas que presten servicios de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones".

En efecto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana, con las restricciones establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables, pero para su aprovechamiento se requiere concesión otorgada conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Al respecto, durante la diligencia de inspección-verificación, **LOS VERIFICADORES**, realizaron el monitoreo de frecuencias en FM y corroboraron que la frecuencia **98.1 MHz** estaba siendo utilizada.³

Asimismo, se corroboró que el probable responsable se encontraba prestando el servicio de radiodifusión sin contar con el título de concesión, permiso o autorización respectivos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, de la LFTyR.

Ahora bien, en el dictamen remitido por la **DGV** se consideró que el probable responsable prestaba el servicio público de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencia **98.1 MHz**, sin contar con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente y en consecuencia el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento de imposición de sanción respectivo, mismo que se procede a resolver por éste Órgano Colegiado.

Lo anterior considerando que de conformidad con los artículos 15, fracción XXXI de la LFTyR y 41 en relación con el 44 fracción I, y 6, fracción XVII del **ESTATUTO**, el Titular de la Unidad de Cumplimiento tiene facultad para sustanciar procedimientos administrativos sancionatorios y el Pleno del Instituto se encuentra facultado para imponer las sanciones respectivas y declarar la pérdida de los bienes, instalaciones y equipos a favor de la Nación, por el incumplimiento e infracción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

En tal sentido, atendiendo a la propuesta formulada por la **DGV**, mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanción que nos ocupa, el cual fue notificado el

³ Sobre el particular, obtuvieron graficas de radiomonitoreo y grabaciones del audio de las transmisiones, mismas que obran en el presente expediente.

ELIMINADAS trece palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

once de marzo del dos mil dieciséis a [REDACTED] quien manifestó ser el cuñado del probable responsable de los bienes de la estación, y en el mismo se le otorgó un plazo de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara procedentes.

CUARTO. MANIFESTACIONES Y PRUEBAS.

Mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil dieciséis el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y la declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en el que se le otorgó a [REDACTED] en su carácter de propietario de la estación de radiodifusión citada con anterioridad, un término de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso, aportara las pruebas con que contara con relación a los presuntos incumplimientos que se le imputaron.

Dicho acuerdo fue notificado el once de marzo de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de quince días hábiles corrió del catorce de marzo al ocho de abril de dos mil dieciséis.

De acuerdo a lo señalado en los Resultandos DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO de la presente Resolución, [REDACTED] presentó pruebas y defensas dentro del plazo establecido para ello y en consecuencia, por proveído de dieciocho de abril del presente año, notificado el veintidós de abril de dos mil dieciséis, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por [REDACTED] asimismo, se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la sede de este Instituto el señalado en el referido escrito de pruebas, y por corresponder al estado procesal que guardaba el presente asunto, con

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



fundamento en el artículo 56 de la LFPA, se pusieron a su disposición los autos del presente expediente para que dentro del término de diez días hábiles formulara alegatos, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitiría la Resolución que conforme a derecho correspondiera.

Por tanto, en cumplimiento y respeto al derecho fundamental de audiencia del C. [REDACTED] se realiza un resumen de las manifestaciones contenidas en su escrito de ocho de abril de dos mil dieciséis, para posteriormente ocuparse del análisis de las mismas.

I. Refiere bajo protesta de decir verdad, que ante la necesidad de hacer efectivos sus derechos de libertad de expresión y acceso a la información y advirtiendo que la frecuencia **98.1 MHz** no se encontraba siendo utilizada por persona física o moral ni por alguna radiodifusora o por el Estado, la comunidad de Luvianos decidió instalar y operar una pequeña radio comunitaria el veinte de noviembre de dos mil trece, utilizando una frecuencia libre **98.1 MHz**, para transmitir información local de interés para la comunidad, recibiendo patrocinios por parte de comercios a manera de aportaciones voluntarias que servían para el sostenimiento de la radio comunitaria **LA CALENTANA MEXIQUENSE**.

II. Manifiesta que al iniciarse el procedimiento administrativo se afirmó erróneamente y sin la fundamentación y motivación debidas que el C. [REDACTED] es el dueño de la estación de radiodifusión identificada como **LA CALENTANA MEXIQUENSE** que operaba la frecuencia **98.1 MHz**, hecho que niega señalando que como se desprende de las fotografías que anexaron **LOS VERIFICADORES** al acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/1007/2015 es posible apreciar que el

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

eslogan de la radio de su comunidad muestra que la radiodifusora citada era **DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO**.

III. En relación a la denuncia presentada en el **Instituto** el día veinticuatro de junio de dos mil quince, manifiesta que la persona de supuesto nombre [REDACTED] no se identifica ni deja constancia que acredite su interés de realizar dicha denuncia, así como tampoco demuestra la afectación que le causa la operación de la estación de radiodifusión identificada como **LA CALENTANA MEXIQUENSE**, asimismo no presentó prueba alguna que respaldara su dicho, por lo tanto no cubre los requisitos legales para que se lleve a cabo el procedimiento que nos ocupa.

IV. Respecto del informe de radlomonitoreo número IFT/415/2015, manifiesta que dicho Informe presenta irregularidades, toda vez que la **DGAVER** no está facultada en términos del Estatuto Orgánico del **Instituto** para realizar visitas de verificación en su modalidad de monitoreo aunado a que la citada visita de verificación se basó en un escrito sin número y sin fecha visible, contraviniendo lo establecido en los artículos 63 y 67 fracción IV de la **LFPA**.

Aunado a lo anterior, con oficio IFT/225/UC/DGA-VESRE/804/2015 de 22 de noviembre de dos mil quince la **DGAVER** Informa al Director General de Verificación del monitoreo realizado el seis de octubre de dos mil quince (es decir más de mes y medio después de realizado el monitoreo), y del que también se puede apreciar que la **DGAVER** realizó el monitoreo del espectro radioeléctrico con seguridad prestada por la Secretaría de Marina Armada de México, sin que obre en el expediente oficio de colaboración que lo justifique.

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



V. Manifiesta que con fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince la DGV tuvo conocimiento del informe de radiomonitorio IFT/415/2015 aun cuando dicho informe de radiomonitorio se realizó el veinte de octubre de dos mil quince, es decir 5 (cinco) días después de haberse emitido la orden de inspección-verificación IFT/DF/DGV/1007/2015 de fecha quince de octubre de dos mil quince, hecho que resulta inexplicable y fuera de toda lógica en virtud de que derivado del referido informe de radiomonitorio la DGV emitió la orden de inspección-verificación.

VI. Respecto a la Orden de Visita de Inspección-Verificación Ordinaria IFT/DF/DGV/1007/2015 manifiesta que la persona con quien se entendió la diligencia se negó a identificarse y no firmó la orden de visita sin que LOS VERIFICADORES asentaran la media filiación de la persona con quien se entendió la diligencia, lo cual es un requisito esencial para corroborar que alguien atendió la referida visita; asimismo manifiesta que la supuesta persona que atendió la visita, señaló como propietario de la estación a [REDACTED] antes de que fueran designados los testigos de asistencia en la diligencia por lo que dicho señalamiento carece de todo valor probatorio.

VII. Respecto de la presunción de que [REDACTED] es el propietario de la estación de radiodifusión que operaba en la frecuencia 98.1 MHz administrando el Acta de Verificación Ordinaria número IFT/DF/DGV/1007/2015 con el oficio número QVG/DGAO/79722, signado por el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refiere que la manifestación bajo protesta de decir verdad que realiza la persona que atendió la visita en la que se le señala como propietario de la estación de radiodifusión

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

citada, carece de toda credibilidad y valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Asimismo, respecto del oficio QVG/DGAO/79722 manifiesta que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo señala como fundador y director de Radio **CALENTANA MEXIQUENSE**, no obstante nunca lo afirma.

Por lo anterior, a efecto de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16, de la **CPEUM**, así como con el principio de exhaustividad en el dictado de las resoluciones administrativas, de conformidad con los artículos 13 y 16, fracción X, de la **LFPA**, esta autoridad procede a estudiar y analizar en esta parte de la Resolución los argumentos presentados por [REDACTED] en el procedimiento sancionatorio que ahora se resuelve, y se aclara que éste último ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como "*el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas ya sean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad, en todo caso, sea imponer alguna sanción.*"³

De la definición señalada por nuestro Máximo Tribunal se puede advertir que el objeto del procedimiento administrativo sancionador es el de conocer irregularidades o faltas, por lo que se infiere que la *litis* del mismo se sujeta únicamente a acreditar o desvirtuar la comisión de la conducta sancionable, lo cual se fortalece con la imposibilidad de impugnar actos emitidos durante el procedimiento.

³ Párrafo 45, Engrose versión pública, Contradicción de Tesis 200/2013 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto en sesión del 28 de enero de 2014, consultable en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx>

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Por tanto, el análisis de los argumentos deberán en todo caso estar encaminados a desvirtuar las imputaciones realizadas por la autoridad, relacionadas con la comisión de las conductas presuntamente sancionables.

En ese sentido, del estudio a los argumentos vertidos por [REDACTED] se advierte que los mismos en principio resultan INOPERANTES, toda vez que no se desprende de estos, elemento de convicción alguno que se encuentre encaminado a desacreditar la conducta que le fue imputada, como lo es el desvirtuar el hecho de que se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por autoridad competente. Sin embargo en aras de cumplir con los principios constitucionales del gobernado como los son los de legalidad y seguridad jurídica, así como el de exhaustividad en el dictado de las resoluciones administrativas mencionados en párrafos precedentes, este Pleno del IFT se pronuncia respecto de los argumentos presentados en los siguientes términos:

Por cuanto hace a la manifestación de [REDACTED] señalada en el numeral I, el Pleno de este Instituto la considera infundada.

En principio debe decirse que dicho argumento resulta infundado en virtud de que el hecho de que la comunidad de Luvianos haya advertido que la frecuencia 98.1 MHz no se encontraba en uso, ello no implica de ninguna manera que pudieran prestar el servicio público de radiodifusión a través de la operación de la estación señalada como **LA CALENTANA MEXIQUENSE** sin contar con el título habilitante respectivo emitido por autoridad competente.

En efecto, es conocido que en un estado de derecho como el nuestro, cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita, previamente.

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo-Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener **datos personales**.

aprobada y de conocimiento público, la cual debe organizar y fijar los límites de toda acción social y estatal.

En este orden de ideas, no basta con el hecho de que determinada población o persona advierta que alguna frecuencia del espectro radioeléctrico se encuentra libre para que se pueda hacer uso de la misma, ya que al ser un bien del dominio público de la Nación se encuentra protegido y regulado por una serie de ordenamientos jurídicos que estipulan los procedimientos que deben seguirse para poder acceder y hacer uso del mismo.

Luego entonces, se advierte lo infundado del argumento del probable responsable ya que cualquier interesado en la explotación comercial o incluso el uso social para fines comunitarios de una frecuencia del espectro radioeléctrico debe cumplir con una serie de requisitos que les permitan la obtención de un título habilitante para su posterior uso, situación que al no ocurrir en el caso que nos ocupa vulnera el estado de derecho y es susceptible de ser sancionada.

Asimismo, cabe señalar que no obstante que la finalidad de la operación de la estación en comento fuera para transmitir información local de interés para la comunidad e incluso que para su funcionamiento recibiera patrocinio por parte de comercios a manera de aportaciones voluntarias, dicha manifestación resulta ineficaz para desvirtuar el hecho de que se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por autoridad competente.

En ese orden de ideas, de dichas manifestaciones únicamente se advierte la confesión expresa por parte de [REDACTED] respecto del hecho de que la estación de radiodifusión señalada como **LA CALENTANA MEXIQUENSE** operaba la frecuencia de **98.1 MHz** desde el veinte de noviembre

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

de dos mil trece, confirmando con ello la prestación del servicio público de radiodifusión sin contar con el documento habilitante emitido por autoridad competente, y por lo tanto dicha confesión resulta prueba plena de los hechos imputados al iniciar el procedimiento sancionatorio que se sustancia en este acto, tal y como se señala en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en adelante "CFPC"), el cual menciona lo siguiente:

"ARTÍCULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o, en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba."

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 200 del CFPC, la confesión realizada en su escrito de manifestaciones y pruebas, resulta prueba plena y con ello se acredita la comisión de la conducta infractora señalada en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de imposición de sanción abierto en su contra, respecto al hecho de que la estación de radiodifusión señalada como LA CALENTANA MEXIQUENSE operaba la frecuencia de 98.1 MHz desde el veinte de noviembre de dos mil trece, confirmando con ello la prestación del servicio público de radiodifusión sin contar con el documento habilitante emitido por autoridad competente.

Ahora bien, el Pleno de este Instituto considera infundadas e insuficientes, las manifestaciones hechas en los numerales II y VII, toda vez que dichos argumentos resultan ineficaces para desacreditar el hecho de que se encontró en funcionamiento y operando una estación de radiodifusión, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por autoridad competente y únicamente se advierte de los mismos una serie de manifestaciones que tiene como finalidad negar que [REDACTED] es el propietario de la estación de radiodifusión que operaba en la frecuencia 98.1 sin que de los

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

mismos se pueda advertir elemento de convicción suficiente para acreditar su dicho.

A efecto de refutar su argumento es conveniente señalar que en el expediente en estudio, existen suficientes indicios que permitieron a esta autoridad formular una presunción para atribuirle a [REDACTED] la responsabilidad de los equipos de radiodifusión.

En efecto, hay presunción cuando se tiene un hecho probado, se presume la existencia o no de otro hecho que inicialmente aparece como desconocido, y que constituye el objeto del proceso, es decir, de los hechos que sí están probados, pueden presumirse los otros datos que faltan para completar el cuadro informativo, vincular los elementos de la relación causal y dar al juzgador, suficientes elementos de convicción para resolver en consecuencia.

La presunción es una forma de razonamiento deductivo que permite, sobre la base de un hecho previamente comprobado y establecido en el proceso; que se llama indicio, concluir en otro hecho cuya verdad se desconoce, pero dada la relación que tiene con el hecho conocido y probado en que se funda es muy probable que haya sucedido.

Por su parte los indicios pertenecen al mundo físico, son materiales, objetivos y se pueden apreciar por los sentidos; más aún, en algunos casos los indicios son concluyentes ya que son los únicos hechos o circunstancias de las cuales se puede, mediante una operación lógica, inferir la comisión de una determinada conducta, por lo que podemos señalar que las presunciones están íntimamente ligadas a los indicios, pero entre ellos se encuentra una relativa diversidad: el indicio es la causa como hecho conocido, y la presunción es el efecto, o sea, el conocimiento del hecho ignorado.

ELIMINADAS nueve palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VII.2o. J/3, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Página 112, Materia Común, Octava Época, que es del tenor literal siguiente:

PRUEBA PRESUNCIONAL EN QUE CONSISTE. La prueba presuncional no constituye una prueba especial sino una artificial que se establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos por medio de los indicios, de manera que por su íntima relación llevan al conocimiento de un hecho diverso al través de una conclusión muy natural, todo lo cual implica que es necesaria la existencia de dos hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto, aunque se trate de demostrar. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Octava Época: Amparo directo 1374/88. Ferrocarriles Nacionales de México. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo 1076/88. Ferrocarriles Nacionales de México. 23 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo 1382/87. Antonio Balanzar Cárdenas y otro. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 386/89. Darío Hernández Sánchez. 18 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 1972/88. Ángel Villegas Argueta. 16 de abril de 1991. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VII.2o.J/3, Gaceta número 41, pág. 115; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 112.

Ahora bien, resulta preciso señalar que del análisis a las actuaciones que integran el expediente del procedimiento sancionatorio en el que se actúa, esta autoridad se sustentó en los siguientes indicios o hechos conocidos dentro del procedimiento administrativo de imposición de sanción que nos ocupa, para atribuir la responsabilidad de la estación de radiodifusión a [REDACTED]

[REDACTED] a saber:

- La denuncia presentada ante la oficialía de partes de este IFT a través de la cual se señala a los CC. [REDACTED] como propietarios de la estación **LA CALENTANA MEXIQUENSE** que operaba la frecuencia 98.1 MHz.

ELIMINADAS doce palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

- La visita de Inspección-verificación IFT/DF/DGV/1007/2015 llevada a cabo el quince de octubre de dos mil quince, de la cual se desprende que la persona que atendió la visita bajo protesta de decir verdad identificó como propietario de la estación en comento al C. [REDACTED] y que además al momento en que los verificadores le solicitaron firmar una copia como constancia de acuse de recibo de la orden de visita manifestó también lo siguiente: "que si lo recibe pero no va a firmar por instrucciones del Señor [REDACTED]".
- El oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/3934/2015 notificado a la DGV el dieciséis de octubre de dos mil quince a través del cual el Director General de Concesiones de Radiodifusión, para efectos de mejor proveer respecto de los datos de identificación del propietario de los equipos asegurados dentro del acta de Inspección-verificación ordinaria IFT/DF/DGV/1007/2015, señala que derivado de los foros de consulta celebrados con motivo de la elaboración de los Lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones ■ que se refiere el título cuarto de la LFTyR se tuvo conocimiento del interés por parte de [REDACTED] para obtener una concesión para uso social comunitaria.
- El oficio QVG/DGAP/79722 recibido el trece de noviembre de dos mil quince en la oficialía de partes del Instituto, emitido por el Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General, en la Comisión de los Derechos Humanos, a través del cual solicita información para atender la queja presentada ante esa dependencia por [REDACTED] en su carácter de fundador y director de la estación de radiodifusión identificada como LA CALENTANA MEXIQUENSE.

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Los indicios anteriores fueron suficientes para presumir un nexo causal entre la infracción detectada por este Instituto e [REDACTED] como probable responsable de tal conducta, lo anterior toda vez que siguiendo un razonamiento lógico deductivo se cumple a cabalidad el silogismo jurídico, a saber:

1. **Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho.** En el presente asunto resulta evidente e irrefutable la operación de una estación de radiodifusión para el uso de la frecuencia 98.1 MHz en el municipio de Luvlanos, Estado de México, la cual no cuenta con el título habilitante expedido por la autoridad facultada para ello.

2. **Que la presunción se funde en hechos reales y probados, nunca en otras presunciones.** En el presente asunto existen constancias documentales y diligencias practicadas por el Instituto que sirven de indicios materiales, objetivos y verificables a través de los sentidos.

3. **Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean:**

a) **Varios.** Existen 4 elementos probatorios que atribuyen la responsabilidad de la estación de radiodifusión al C. [REDACTED] los cuales han quedado previamente especificados en párrafos anteriores.

b) **Relacionados.** Los 4 indicios se encuentran íntimamente vinculados entre sí ya que independientemente de que cuentan con diferentes fechas de elaboración, todos guardan relación directa con el hecho probado en el presente asunto, es decir, el uso de una estación radiodifusora que no cuenta con título habilitante.

ELIMINADAS quince palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

c) Unívocos. El C. [REDACTED] aparece señalado como propietario tanto en la denuncia como en el acta de visita, además de demostrar su interés en la estación al ostentarse como fundador de la misma.

d) Directos. Ya que la responsabilidad de los equipos de radiodifusión se establece en forma lógica y natural, sin mayor esfuerzo mental y sin que exista alguna posibilidad diferente a esta conclusión.

Por las consideraciones anteriores al iniciar el procedimiento sancionatorio de nuestra atención, esta autoridad presumió la responsabilidad de la estación radiodifusora a [REDACTED] toda vez que se contaba con los indicios citados que permitieron presumirle con tal carácter, más aún, considerando que él ha sido la única persona que ha comparecido en el procedimiento sancionatorio en el que se actúa y del cual se ha observado que en todo momento [REDACTED] se ha apersonado para sustanciar el mismo, presentando manifestaciones, alegatos e incluso ha comparecido ante otras autoridades como lo es la CNDH, para actuar en representación de LA CALENTANA MEXIQUENSE, lo cual genera convicción a esta autoridad respecto de la responsabilidad por parte [REDACTED] [REDACTED] en la conducta infractora que se sustancia en este procedimiento.

Ahora bien, es fácil advertir que estamos en presencia de una presunción deducida de hechos comprobados, la cual admite prueba en contrario de conformidad con lo señalado en los artículos 190 fracción II y 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Una vez llegados a este punto, se puede advertir lo infundado del argumento hecho valer por [REDACTED] al señalar que la citada estación de radiodifusión LA CALENTANA MEXIQUENSE es propiedad del pueblo de Luvlanos, toda vez que resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de

ELIMINADAS doce palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



responsabilidad deducida por este Instituto, lo anterior en virtud de que un "pueblo" de la forma genérica como lo señala, no puede tener personalidad jurídica propia y por ende al carecer de la misma no es sujeto de derechos ni tiene capacidad suficiente para contraer obligaciones frente a sí mismo ni frente a terceros, cabe señalar que de su argumento se advierte que [REDACTED] pretende fundar su dicho a través de las fotografías que se anexaron a la visita de inspección-verificación, donde resulta visible que el eslogan de la citada radiodifusora señala que es "DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO", lo cual no es una prueba idónea para señalar al pueblo de Luvianos como el propietario de la estación citada y por ende resulta insuficiente para destruir la presunción de responsabilidad formulada en su contra.

Cabe señalar que en todo caso para demostrar su dicho [REDACTED] tenía la obligación de rendir las contrapruebas que refutaran y desvirtuaran la presunción formulada por esta autoridad, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala: *"La parte que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de los supuestos de aquélla"*.

En este sentido, [REDACTED] no aportó elementos de convicción que desvirtuaran la presunción hecha valer en su contra, limitándose únicamente a manifestar lisa y llanamente *"que no es y nunca ha sido propietario de la estación de radiodifusión identificada como LA CALENTANA MEXIQUENSE"*, las cuales constituyen solamente manifestaciones subjetivas que no desvirtúan los indicios en que se basó esta autoridad para atribuirle la responsabilidad de la estación de radiodifusión.

Se reitera que [REDACTED] no pudo presentar alguna prueba idónea que acreditara la propiedad de la estación a otra persona física o

moral diversa, pues al negar que sea él, el propietario de la radiodifusora y afirmar que lo es el pueblo de Luvianos no se desprende indicio alguno que pudiera probar su dicho, por tanto en virtud de que no presentó elementos probatorios fehacientes e indubitables que acrediten su manifestación, resultan infundados los argumentos hechos valer por el presunto responsable.

Refuerza lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LII, Tercera Parte, Página 9, Materia Común, Sexta Época, la cual en la parte que nos interesa señala:

ACTO RECLAMADO, CARGA DE LA PRUEBA DE SUS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS.

Si bien es verdad que, demostrada la existencia de los actos reclamados incumbe a la autoridad responsable justificarlos, también lo es que no por tal circunstancia queda liberado quien impugna dichos actos, del deber de desvirtuar los fundamentos y motivos en que los mismos se apoyan. Cuando un acto de autoridad externa los fundamentos y motivos que le sirven de sustentación, goza de una presunción de validez y en esto estriba su justificación, y corre a cargo del afectado con dicho acto la demostración de que los mencionados fundamentos y motivos son inadecuados, a fin de que pueda concluirse que los referidos actos son contrarios a la ley que los rige. Si en un caso la sentencia reclamada está fundada y motivada, por lo que, habiendo rendido la Sala responsable ante el Juez a quo, como prueba, el expediente en que dicha sentencia fue pronunciada, debe admitirse que justificó, como estimó pertinente, el sentido de la citada sentencia; y que a su impugnador correspondía demostrar, con los argumentos y las pruebas que a su vez considera oportuno aportar, que la pretendida justificación era incorrecta. Amparo en revisión 7066/60, Aceros Comerciales y Construcciones, S. A. 19 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Asimismo, tienen aplicación la siguiente Tesis:

PRESUNCIÓN RELATIVA EN MATERIA CIVIL. SI LA LEY LE OTORGA EFICACIA PROBATORIA PLENA, PARA DESTRUIR SU EFECTO ES INSUFICIENTE Oponer INDICIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). En la doctrina jurídica procesal de nuestros días es casi unánime la convicción de que las dos clases de presunciones: legales y humanas no son propiamente pruebas, sino el principio o argumento lógico que permite al juzgador otorgar mérito convictivo al indicio o a las pruebas en general, es decir, es la función racional que efectúa el Juez para inferir a partir de un hecho probado la

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



existencia de otro desconocido. Cuando la presunción está prevista en la ley se llama legal, mientras que la judicial es aquella que realiza el órgano decisor según las reglas de la lógica y la experiencia, también llamada humana. Entre las legales, las presunciones son relativas iuris tantum o absolutas iuris et de iure, según admitan o no prueba en contrario. Así, esa verdad provisional o absoluta proviene de lo dispuesto por el legislador, de manera que una vez comprobado el hecho al Juez le corresponde atribuir certeza a sus consecuencias. Ahora bien, de acuerdo con la interpretación sistemática de los artículos 258, 373 y 391 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, la falta de contestación de la demanda genera la presunción de tener por confesados los hechos que en ella se imputen y a su vez esa confesión tácita, resultado de una presunción legal relativa, debe ser valorada como una prueba cuya certeza sólo es destruible mediante otra probanza que se aporte en sentido contrario; pero, además, es necesario tener presente que el último dispositivo citado precisa con claridad que las presunciones legales hacen prueba plena. De lo anterior se concluye que la idoneidad de la contraprueba ha de ser tal que resulte contundente para vencer la plenitud convictiva que la ley le atribuye a la confesión tácita, de manera que si el demandado no ofrece prueba alguna o sólo aporta un indicio o varios no articulados entre sí, o una o varias pruebas disociadas que la ley no les reserve la calidad de plenas, entonces, no es posible vencer la solidez atribuida por el ordenamiento adjetivo de mérito a la presunción relativa de que se trate.

Época: Novena Época, Registro: 182792, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: XVII.1o.P.A.31 C
Página: 1004

Finalmente se señala que independientemente del carácter de propietario que alega no tener, toda vez que atribuye tal propiedad al pueblo de Luvianos, dicha condición no afecta la responsabilidad administrativa de [REDACTED] [REDACTED] toda vez que como se ha señalado en los párrafos anteriores, de las constancias referidas se acredita que él es el responsable de la estación de radiodifusión y en consecuencia se infiere su responsabilidad respecto de la operación de la misma, de ahí que sus manifestaciones tratando de desvirtuar la propiedad resulten inoperantes.

Corroborar el anterior argumento, la tesis número VI.2o.C.341 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séxto Circuito, visible en el

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Página 1063, Materia Civil, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA, AQUILIANA Y OBJETIVA. DIFERENCIAS. La primera se origina cuando por hechos culposos, lícitos o ilícitos se causan daños; la aquiliana opera en los casos en que de los resultados de la conducta dañosa deba responder una persona distinta del causante; finalmente, existe responsabilidad objetiva sin existencia del elemento culpa para el dueño de un bien con el que se causen daños. Así, el que es ocasionado por la comisión de los actos ilícitos genera obligaciones en atención a la conducta de la persona a la que le es imputable su realización, pudiendo identificar a este tipo de responsabilidad como subjetiva, por contener el elemento culpa; también genera responsabilidad el daño causado por terceros y, en este caso, aun cuando no existe vínculo directo entre el que resulta obligado y el que realiza la conducta, el nexo surge de la relación que existe entre unos y otros, y así los padres responden de los daños causados por sus hijos, los patrones por los que ocasionen sus trabajadores y el Estado por los de sus servidores; por último, resulta diferente el caso en que, aun en ausencia de conducta, surge la obligación por el solo hecho de ser propietario de una cosa que por sus características peligrosas cause algún daño.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 99/2003. Seguros Tepeyac, S.A. 29 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Por cuanto hace a la manifestación realizada en el numeral III, resulta inoperante

toda vez que de la misma únicamente se advierte que [REDACTED]

[REDACTED] hace referencia a la denuncia presentada el veinticuatro de junio de dos mil quince por el C. [REDACTED] ante este Instituto,

argumentando que la persona que la interpuso no se identificó ni acreditó el interés que tenía al realizarla, así como tampoco señaló la afectación que le causó la operación de la estación de radiodifusión, sin que al efecto refiera de qué manera ello pudiera desvirtuar el hecho de que la estación de radiodifusión señalada como LA CALENTANA MEXIQUENSE operaba la frecuencia de 98.1 MHz sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por la autoridad correspondiente, lo que trae como consecuencia que al ser impreciso su argumento resulte inatendible y en consecuencia inoperante.

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

No obstante lo anterior, cabe señalar que las denuncias presentadas ante este IFT con motivo de radiodifusoras que operan sin concesión no tienen que cubrir más requisitos que los que se informan en la página de Internet del Instituto⁵ los cuales consisten en señalar: i) nombre del denunciante (lo cual es opcional), ii) la frecuencia en la que opera (MHz), iii) el tipo de comunicación, iv) el estado en el que se escucha, v) localidad en la que se escucha, vi) horario en que se presenta la transmisión y vii) otra información que considere de utilidad el denunciante.

El Pleno de este Instituto considera infundados los argumentos de [REDACTED] realizados en los numerales IV y V, en los que señala que el informe de radiomonitorio IFT/415/2015 presenta irregularidades refiriendo que (i) la DGAVER no está facultada para realizar la visita de verificación en su modalidad de monitoreo, aunado a que dicho monitoreo se realizó con seguridad prestada por la Secretaría de Marina Armada de México, sin que obre en el expediente oficio de colaboración que lo justifique, (ii) que el oficio IFT/225/UC/DGA-VESRE/804/2015 de 26 de noviembre de dos mil quince a través del cual se informa a la DGV del monitoreo realizado el seis de octubre de dos mil quince, se presentó con más de un mes y medio después de realizado el monitoreo, (iii) que resulta fuera de lógica que el citado informe de radiomonitorio IFT/145/2015 fuera realizado con fecha veinte de octubre de dos mil quince y la orden de inspección-verificación IFT/DF/DGV/1007/2015 se realizara el quince de octubre de dos mil quince, siendo que con motivo de lo detectado en el citado informe de radiomonitorio se ordenó realizar la visita de inspección-verificación.

Al respecto, es preciso señalar que la DGAVER en apego a las facultades de monitoreo y vigilancia del espectro radioeléctrico que tiene conferidas en el

⁵ Visible en

<http://www.ift.org.mx/industria/unidad-de-cumplimiento/denuncias-radiodifusoras-sin-concesion>

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Estatuto Orgánico de este **Instituto**, con fecha seis de octubre de dos mil quince y con apoyo del personal adscrito a esa unidad administrativa realizó los trabajos de radiomonitorio y vigilancia del espectro radioeléctrico en la población de Luvianos Estado de México, lo anterior en virtud de que dicho ordenamiento en su artículo 45 es claro al establecer entre las facultades de la **DGAVER** las siguientes:

"Artículo 45.- Corresponde a la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico el ejercicio de las siguientes atribuciones:

(...)

III. Llevar a cabo el monitoreo y vigilancia del espectro radioeléctrico, así como la identificación de interferencias perjudiciales y proponer o tomar las medidas correspondientes para corregirlas o eliminarlas (...)

VIII. Proponer a la Dirección General de Verificación la práctica de visitas de inspección o verificación, y (...)"

En ese sentido, contrario a lo manifestado por [REDACTED] se observa que la **DGAVER** llevó a cabo los trabajos de radiomonitorio y vigilancia del espectro radioeléctrico en estricto apego a sus facultades previstas en el citado artículo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones por lo que resulta infundado el argumento que pretende hacer valer el presunto responsable, toda vez que como ha quedado acreditado la **DGAVER** se encuentra debidamente facultada para llevar a cabo dichas funciones.

Ahora bien, si bien es cierto que al llevarse a cabo el monitoreo del espectro radioeléctrico en la población de Luvianos, Estado de México éste se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, es preciso aclarar que lo anterior fue únicamente para salvaguardar la integridad de los servidores públicos adscritos a la **DGAVER** que realizaron los referidos trabajos de monitoreo, así como la seguridad del equipo utilizado para la realización de los trabajos en

ELIMINADAS treinta y cuatro palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



campo, lo que en ningún momento vulnera la esfera jurídica del particular, toda vez que la Secretaría de Marina no tuvo participación alguna en dicha diligencia.

Ahora bien, respecto de su argumento hecho valer en el sentido de que a través del oficio IFT/225/UC/DGA-VESRE/804/2015 emitido hasta el veintiséis de noviembre de dos mil quince, fue que la DGV tuvo conocimiento del radiomonitorio realizado por la DGAVER y que derivado del reporte IFT/145/2015 emitido con esa misma fecha, fue que la DGV emitió la orden de Inspección- verificación, debe decirse que el mismo resulta infundado en virtud de que tal y como se desprende de las constancias documentales que integran el expediente, se advierte que si bien es cierto, el veintidós de octubre de dos mil quince la DGAVER remitió el informe IFT/145/2015, lo anterior se trata únicamente de una gestión administrativa entre diferentes oficinas de este Instituto con la única finalidad de formalizar dichas actuaciones dentro del expediente de la DGV, lo cual no le causa perjuicio ni vulnera derechos procesales de [REDACTED] toda vez que independientemente de la fecha de elaboración del citado oficio, lo cierto es que la diligencia de radiomonitorio se efectuó el día seis de octubre de dos mil quince, lo cual se desprende claramente del citado reporte, a saber:

OBSERVACIONES			
PERIODO DE OBSERVACION DEL	06	DE	octubre
DETECTASE OPERAR A ESTACION (ES) IDENTIFICANDOSE COMO:	AL	06	DE octubre DEL 20 15
TRAFFICO RELATIVO A:	Música y programación variada		
EQUIPO UTILIZADO:	Equipo portátil, Analizador de Espectro, marca Anritsu		
FRECUENCIA MEDIDA EN LA ESTACION (ES) FIJA (S):	98.100 MHz		
FRECUENCIA MEDIDA PARA SUS MOVILES:	No aplica		
OBSERVACIONES: En atención al escrito sin número y sin fecha visible, dirigido al Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el que reporta la operación de la estación de Radiodifusión que se ubica en [REDACTED] a unos metros del centro del Municipio de Luvianos, Estado de México, propiedad del Sr. [REDACTED]. Se realizó el monitoreo y localización de la citada estación, ubicando la emisión en la frecuencia 98.1 MHz, en el domicilio que más adelante se indica, en dicho inmueble se encuentra una torre estructural de aproximadamente 18 metros sobre el nivel de la azotea, y sobre la misma un elemento radiador omnidireccional del que se origina la citada emisión.			
UBICACIÓN:	[REDACTED]		
LATITUD:	DOA:	No aplica	OTROS:
LONG:	LPDF:	No aplica	No aplica

ELIMINADAS nueve palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Derivado de lo anterior, fue que la DGV emitió la orden de inspección-verificación IFT/DF/DGV/1007/2015, esto es siete días hábiles después de realizado el citado monitoreo, por lo tanto resulta infundada la manifestación de [REDACTED] al señalar irregularidades en los plazos en que actuó esta autoridad, toda vez que se reitera, se trata de gestiones administrativas entre oficinas que pertenecen a la misma unidad administrativa, por lo que se concluye que el desfase en las fechas de elaboración de documentos no invalida las actuaciones o diligencias que los mismos contienen, máxime que como se ha demostrado dichas diligencias fueron efectuadas secuencialmente siguiendo un orden cronológico, de ahí lo infundado de las manifestaciones de [REDACTED]

Por cuanto hace al argumento de [REDACTED] señalado en el numeral VI, a través del cual señala irregularidades en la visita de inspección-verificación IFT/DF/DGV/1007/2015, el mismo resulta infundado atendiendo a lo siguiente:

Es conveniente señalar que al levantarse el acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/1007/2015, misma que se realizó en cumplimiento al oficio IFT/225/UC/DG-VER/4194/2015 que contenía la orden de visita de inspección-verificación ordinaria IFT/DF/DGV/1007/2015, este Instituto actuó en estricto apego a sus facultades conferidas en la normatividad aplicable, y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en los artículos 66 y 67 de la LFPA, que a la letra establecen lo siguiente:

"Artículo 66.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos.

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta.

Artículo 67.- En las actas se hará constar:

- I. Nombre, denominación o razón social del visitado;*
- II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;*
- III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;*
- IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;*
- V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;*
- VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;*
- VII. Datos relativos a la actuación;*
- VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y*
- IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa."*

En este sentido, contrario a lo manifestado por [REDACTED] el acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/1007/2015 cumplió con todos los requisitos establecidos en los artículos 66 y 67 de la LFPA, en virtud de que se levantó en presencia de los testigos CC. Daniel Pérez Mérida y Pedro Daniel Reyes Gómez quienes ante la negativa de la persona que atendió la diligencia fueron designados por LOS VERIFICADORES.

Ahora bien, contrario a lo señalado por [REDACTED] el artículo 67 de la LFPA, no contiene como requisito de las actas de verificación el asentar la media filiación de la persona con la que se atiende la diligencia, luego entonces deviene infundado su argumento y en consecuencia no se le causa perjuicio por el hecho de que no se asentó este dato en el acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/1007/2015, toda vez que el numeral 66 de la LFPA es claro al señalar que aunque la persona que atiende la diligencia se hubiere negado a firmar, tal situación no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la

ELIMINADAS doce palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

propia acta, lo cual quedó plenamente asentado en la foja 5 del referido documento en la parte que señala "La persona que atiende la presente, recibe copia del acta pero se niega a firmar", razón por la cual resultan infundados sus argumentos.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR [REDACTED]

En relación con el estudio, análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por [REDACTED], atendiendo a los elementos de convicción se menciona lo siguiente;

- Diversas fotografías de las que se desprenden varias actividades comunitarias organizadas por la estación de radiodifusión señalada como LA CALENTANA MEXIQUENSE para los habitantes del pueblo de Luvianos, Estado de México.

[REDACTED] ofreció y se tuvieron por admitidas y desahogadas diversas fotografías, a las cuales no se les otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles ya que no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena, aunado al hecho de que de las mismas no se desprende elemento de convicción alguno que permita presumir la existencia de algún hecho o disposición legal que desvirtúe las imputaciones realizadas en el inicio del procedimiento de sanción.

QUINTO. ALEGATOS

Seguendo las etapas del debido proceso, esta autoridad mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, notificado a [REDACTED] [REDACTED] el veintidós de abril de este año, se le concedió un plazo de diez días hábiles para formular alegatos, el cual corrió del veinticinco de abril al nueve de mayo de dos mil dieciséis derecho que fue ejercido a través de la

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

presentación del escrito presentado el día de su vencimiento respecto del cual se realizan las siguientes precisiones:

De las constancias que forman parte del presente expediente, se observa que para tal efecto, [REDACTED] presentó escrito de alegatos ante éste IFT con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis.

Cuestión previa

Antes de analizar los alegatos presentados, se debe precisar lo sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en el sentido de que los alegatos no son la etapa procesal a través de la cual deban hacerse manifestaciones a efecto de desvirtuar las imputaciones hechas para iniciar el procedimiento sancionador.

Estos argumentos, en su modalidad de alegatos de bien probado, se traducen en el acto mediante el cual, una parte expone en forma metódica y razonada los fundamentos de hecho y de derecho sobre los méritos de la prueba aportada, y el demérito de las ofrecidas por la contraparte, es decir, reafirmar los planteamientos aportados a la contienda en el momento procesal oportuno, esencialmente en la demanda o su ampliación o sus respectivas contestaciones.

En efecto, los alegatos son las argumentaciones que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatória y probatoria; lo cual fue atendido por [REDACTED] [REDACTED] mediante escrito recibido el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en los cuales realizó diversas manifestaciones reafirmando los planteamientos aportados en su escrito de manifestaciones, mismos que ya fueron puntualmente atendidos durante el desarrollo de la presente resolución, por lo que al haberse abordado su estudio en párrafos precedentes se concluye que no deben estudiarse en forma destacada.

Sirve de aplicación por analogía la siguiente Tesis que a la letra señala:

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE NULIDAD. NO PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE SE HAGA SU ESTUDIO EN FORMA DESTACADA, SI LA SALA FISCAL, EN FORMA IMPLÍCITA, ABORDÓ LAS CUESTIONES EN ELLOS PLANTEADAS Y LAS CONSIDERÓ INFUNDADAS, PUES EN TAL SUPUESTO NO VARIARÍA EL SENTIDO DEL FALLO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 62/2001). En la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que debe ampararse al quejoso, cuando la respectiva Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya omitido analizar los alegatos de bien probado o aquellos en los que se controvierten los argumentos expuestos en la contestación de la demanda o se objetan o refutan las pruebas aportadas por la contraparte. Sin embargo, el otorgamiento de la protección constitucional por ese motivo se encuentra supeditada a que la omisión pueda trascender al sentido de la sentencia, es decir, que de realizarse el estudio de tales cuestionamientos, pueda derivar una nueva reflexión y cambiar el sentido en que previamente se resolvió, pues de lo contrario no se justificaría ordenar su examen, si finalmente no tendrían relevancia para la emisión de la nueva resolución. Por tanto, no procede conceder el amparo al quejoso, cuando la Sala Fiscal haya omitido hacer un pronunciamiento destacado acerca de dichos alegatos, si en forma implícita abordó las cuestiones en ellos planteadas y las estimó infundadas, pues con ello no podría variarse el sentido del fallo; por consiguiente, a nada práctico conduciría conceder el amparo por ese motivo, si a la postre la responsable emitiría un nuevo fallo en el mismo sentido que el reclamado."

Época: Novena Época, Registro: 176761, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: V.5o.2 A, Página: 835.

En ese sentido como se puede advertir del criterio transcrito, es claro que no existe la necesidad de que se transcriban los alegatos para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en la presente resolución, pues tales principios se satisficieron al precisar los puntos sujetos a debate y al haber sido atendidas todas las cuestiones planteadas en los mismos en el **considerando CUARTO**, por lo que en su caso deberá estarse a lo establecido en dicho considerando.

Por lo anterior, al no existir análisis pendiente por realizar se emite la presente resolución atendiendo a los elementos que causan plenitud convictiva en esta autoridad, siguiendo los principios procesales que rigen todo procedimiento.

Sirve de aplicación por analogía la siguiente Jurisprudencia que señala:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a

que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza."

Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tests: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396.

Por lo anterior, al no existir análisis pendiente por realizar se procede a emitir la presente resolución atendiendo a los elementos que causan plenitud convictiva en esta autoridad, cumpliendo los principios procesales que rigen todo procedimiento.

Sirve de aplicación por analogía la siguiente Jurisprudencia que a su letra señala:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad,

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396."

SEXTO. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS

1. Derivado de lo antes expuesto, se considera que existen elementos de convicción suficientes y determinantes que acreditan que [REDACTED] se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión sin contar con la concesión que lo habilitara para tal efecto transgrediendo con esto lo dispuesto por los artículos 66 en relación con el 75 y la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 305, todos de la LFTyR.
2. Se afirma, lo anterior, en virtud de que del análisis de la conducta desplegada en relación con lo establecido en los preceptos legales que se estiman transgredidos claramente se puede advertir que se surten todos los supuestos previstos por los mismos.
3. Existe certeza de que es el responsable de la operación de los equipos de radiodifusión detectados en el municipio de Luvianos, Estado de México.

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

En ese sentido, este Pleno del Instituto considera que existen elementos suficientes para determinar que [REDACTED] es el responsable de la estación de radiodifusión que operaba de forma ilegal toda vez que prestaba el servicio público de radiodifusión, en franca violación del artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR.

Así, el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación que se resuelve en contra de [REDACTED] se inició de oficio por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, y actualización de la hipótesis prevista en el artículo 305, ambos de la LFTyR, mismos que establecen:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título."

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

Del análisis de los preceptos transcritos, se desprende que la conducta susceptible de ser sancionada es la prestación de servicios de radiodifusión sin contar con concesión o autorización emitida por la autoridad competente, por lo que con el fin de cumplir a cabalidad con el principio de tipicidad se debe analizar si la conducta desplegada se adecua a lo señalado por la norma.

En ese sentido, con el fin de establecer lo que debe entenderse por la prestación de un servicio de radiodifusión, resulta importante considerar lo señalado por las fracciones LIV y LXV del artículo 3 de la LFTyR, mismas que señalan lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello;

LXV. Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica;

De lo señalado por la LFTyR se desprenden los elementos que componen el concepto de radiodifusión, mismos que deben ser analizados a la luz de la conducta desplegada para sustentar la determinación de incumplimiento.

En ese sentido las premisas del concepto de radiodifusión son las siguientes:

1. La propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado.
2. El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico atribuidas por el Instituto a tal servicio.
3. La población las puede recibir de manera directa y gratuita utilizando los dispositivos idóneos para ello.

La primera y la tercera de las premisas se encuentran plenamente acreditadas en el procedimiento administrativo en que se actúa al existir constancia en autos del disco compacto remitido como adjunto a la propuesta de inicio del procedimiento, en el cual se contienen las grabaciones realizadas al momento de realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico, de las cuales se desprende que efectivamente se estaban transmitiendo señales de audio, mismas que pueden ser recibidas de manera directa por la población con el simple hecho de contar con el medio idóneo, que en el presente caso lo constituye un radio receptor.

De igual forma, la primera y segunda de las premisas quedaron plenamente acreditadas durante el desarrollo de la diligencia de verificación, ya que derivado del monitoreo se detectó el uso de la frecuencia **98.1 MHz** a través de una antena omnidireccional sin marca, sin modelo ni número de serie, una Lap Top marca HP sin modelo ni número de serie, una mezcladora marca HENYX sin modelo ni número de serie, una mezcladora marca AUTECH sin modelo ni número de serie, tres micrófonos sin marca, sin modelo ni número de serie y un CPU sin marca ni modelo ni número de serie, con lo que se acredita la propagación de ondas y el uso de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, de la definición de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión se desprenden los siguientes elementos:

- ✓ Son servicios de interés general.
- ✓ Son prestados por concesionarios.
- ✓ Son para el público en general.
- ✓ Tienen fines comerciales, públicos o sociales.
- ✓ Se prestan conforme a las leyes aplicables

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Del análisis de dichos elementos se desprende que en el presente asunto [REDACTED] no acreditó tener el carácter de concesionario, además de que en los archivos del IFT no obra concesión o permiso otorgado para operar esa frecuencia en dicha localidad.

Adicionalmente la frecuencia utilizada para esa entidad no se encuentra registrada en la infraestructura de Estaciones de Radio de Frecuencia Modulada ("FM") publicada en la página Web del Instituto, circunstancia que por sí misma constituye un hecho notorio que pone de manifiesto que los servicios no se prestaban conforme a la ley, no obstante que se encontraban a disposición del público en general por lo detectado y grabado en el monitoreo.

Ahora bien, otro elemento que resulta importante analizar es que con independencia de la finalidad de la estación de radiodifusión, para poder prestar dicho servicio se deben de cumplir con los requisitos previstos por la Ley, esto en virtud de que como se puede advertir de lo señalado por la norma, no existe la necesidad de acreditar un uso comercial, público o social.

Así las cosas, en el presente asunto durante la Visita de Inspección-Verificación se acreditó la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 98.1 MHz con los siguientes equipos instalados y en operación: una antena omnidireccional en la azotea del inmueble, sobre un mástil con una línea de transmisión y en el interior del cuarto se encuentra un transmisor en la frecuencia 98.1 MHz conectado a diversos equipos; [REDACTED]

[REDACTED] en su carácter de responsable de la estación de radiodifusión donde se detectaron instalados y en operación dichos equipos; no acreditó contar con concesión o permiso que acreditara la prestación del servicio público referido; por tanto, se considera que es responsable de la violación a lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75, y dicha conducta es

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

sancionable en términos de la fracción I del inciso E) del artículo 298 de la LFTyR. Asimismo, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de dicho ordenamiento y lo procedente es declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes empleados en la comisión de la infracción.

En efecto, el artículo 298 inciso E), fracción I de la LFTyR, establece lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E. Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

(...)

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o"

En consecuencia, y considerando que [REDACTED] es responsable de la estación de radiodifusión a través de la cual se prestaba el servicio de radiodifusión mediante el uso de la frecuencia 98.1 MHz, sin contar con concesión, permiso o autorización correspondiente que lo habilite para tal fin, lo procedente es imponer la sanción que corresponda en términos del citado artículo 298, inciso E), fracción I de la LFTyR y conforme al citado artículo 305 procede declarar la pérdida de los equipos detectados durante la visita de inspección-verificación, consistentes en:

- a) Una antena omnidireccional sin marca, sin modelo ni número de serie,
- b) Lap Top marca HP, sin modelo ni número de serie,
- c) Transmisor de fabricación nacional sin marca, sin modelo ni número de serie,
- d) Una mezcladora marca HENYX sin modelo ni número de serie,
- e) Una mezcladora marca AUTECH, sin modelo ni número de serie,
- f) Tres micrófonos sin marca, sin modelo ni número de serie y
- g) Un CPU sin marca, sin modelo ni número de serie.

Lo anterior, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la Federación, el cual es un recurso limitado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la CPEUM, corresponde al Estado a través del Instituto salvaguardar su uso, aprovechamiento y explotación en beneficio del Interés público.

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios judiciales:

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO. La Sección Primera, Apartado 1-5, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a las ondas radioeléctricas u ondas hertzianas como las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Por su parte, el artículo 3o., fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. En ese tenor, si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el derecho internacional con el del espectro radioeléctrico, que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye que este último forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, sobre el que la Nación ejerce dominio directo en la extensión y términos que fije el derecho internacional conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que, como tal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana con las restricciones establecidas en las leyes y reglamentos administrativos aplicables, pero para su aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso otorgados conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Época: Novena Época, Registro: 170757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 65/2007, Página: 987"

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

***ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SU CONCEPTO Y DISTINCIÓN CON RESPECTO AL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.** El artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación, sin guía artificial de ondas electromagnéticas, cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los tres mil gigahertz. Así, las frecuencias se agrupan convencionalmente en bandas, de acuerdo a sus características, y el conjunto de éstas constituye el espectro radioeléctrico, el cual integra una parte del espectro electromagnético utilizado como medio de transmisión para distintos servicios de telecomunicaciones, y es un bien del dominio público respecto del cual no debe haber barreras ni exclusividad que impidan su funcionalidad y el beneficio colectivo. Cabe señalar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y las frecuencias que lo componen son las que están en el rango entre los tres hertz y los tres mil gigahertz y, en esa virtud, su explotación se realiza aprovechándolas directamente o concediendo el aprovechamiento mediante la asignación a través de concesiones.

Época: Décima Época, Registro: 2005184, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.72 A (10a.), Página: 1129"

En ese sentido, se concluye que [REDACTED] en su carácter de responsable de la estación de radiodifusión identificada como **LA CALENTANA MEXIQUENSE** es administrativamente responsable de la prestación de dicho servicio a través del uso del espectro radioeléctrico en la frecuencia **98.1 MHz**, en el Municipio de Luvianos, en el Estado de México, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva, por lo que en tal sentido es responsable de la violación al artículo 66 en relación con el 75, y lo procedente es imponer una multa en términos del artículo 298, inciso E), fracción I, ambos de la **LFTyR**. De igual forma con dicha conducta se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 del mismo ordenamiento y en consecuencia procede declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes y equipos empleados en la comisión de dicha infracción.

SÉPTIMO. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN.

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



El incumplir con el artículo 66 en relación con el 75, ambos de la LFTyR, resulta sancionable en términos de lo previsto en el artículo 298, apartado E), fracción I de la citada Ley, que a la letra señala:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:...

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización..."

En ese sentido, a efecto de contar con la información necesaria para emitir la determinación que en derecho correspondiera, en el acuerdo de inicio de procedimiento se solicitó a [REDACTED] que acreditara sus ingresos acumulables del ejercicio dos mil catorce para estar en posibilidad de calcular la multa correspondiente en términos de la LFTyR, sin embargo el presunto infractor no proporcionó a esta autoridad dicha información.

En ese sentido, al no contar con la información solicitada, a efecto de determinar el monto de la multa, resulta procedente acudir al mecanismo establecido en el artículo 299, párrafo tercero, fracción IV, de la LFTyR, que establece:

"Artículo 299. En el caso de infractores que, por cualquier causa, no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta o que habiéndoseles solicitado no hubieren proporcionado la información fiscal a que se refiere el artículo que antecede se les aplicaran las siguientes las multas siguientes:

IV. En los supuestos del artículo 298, incisos D) y E), multa hasta por el equivalente a ochenta y dos millones de veces el salario mínimo.

Para calcular el importe de las multas referidas en razón de días de salario mínimo, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal del día que se realice la conducta o se actualice el supuesto.

(Énfasis añadido)

Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar la multa que en derecho corresponda, esta autoridad debe atender a lo establecido en el artículo 301 de la LFTyR, que a la letra señala:

"Artículo 301. Para determinar el monto de las multas establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:

I. La gravedad de la infracción;

II. La capacidad económica del infractor;

III. La reincidencia, y

IV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse."

Para estos efectos, esta autoridad considera que de conformidad con las disposiciones referidas y en atención al principio de exacta aplicación de la ley, la sanción que en todo caso se imponga debe ser congruente con el análisis que se efectúe conforme a los elementos precisados en el precepto legal antes indicado.

De esta manera, al encontrarse establecidas por el legislador el conjunto de reglas encaminadas a individualizar el monto de la sanción aplicable por la comisión de la conducta y al no existir norma alguna que obligue a adoptar algún procedimiento en específico para la cuantificación de la multa, la autoridad puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para esos efectos gozando de un cierto grado de discrecionalidad para determinarla, siempre y cuando se motive de manera adecuada el grado de reproche imputado al inculpaado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INculpADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. De conformidad con los artículos 70 y 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base

en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la discrecionalidad de la que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quantum de la pena resulta congruente con el grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe norma alguna que lo constrinja a adoptar algún procedimiento matemático en específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor.

Época: Novena Época, Registro: 176280, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 157/2005, Página: 347"

(Énfasis añadido)

En ese sentido, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, esta autoridad procede a analizar cada uno de los elementos que se deben de tomar en consideración para estar en posibilidad de determinar el monto de la sanción que se debe aplicar.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que si bien es cierto el artículo 301 de la LFTyR, establece como elementos a considerar para efectos de fijar el monto de la multa los siguientes: a) La gravedad de la infracción; b) La capacidad económica del infractor; c), La reincidencia; y d), En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio; de los mismos solo resultan atendibles para la fijación primigenia de la multa los dos primeros, es decir, la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor; no así la reincidencia y el cumplimiento espontaneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento, lo anterior en virtud de que en tratándose de la reincidencia, la misma es un factor que en términos del artículo 300 de la LFTyR, permitiría duplicar la multa impuesta para el caso de que

se actualizará dicha figura, lo que implica que de suyo no es un factor que incida en la determinación de la multa, sino que opera como una agravante para imponer una sanción más severa para quien ha vuelto a infringir la normatividad de la materia; en tanto que, a contrario sensu, en caso de actualizarse el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento, permite contar con una atenuante que traería como consecuencia la disminución en el monto de la sanción originalmente decretada.

Así las cosas y conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado estima procedente llevar a cabo el análisis de la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor como factores para determinar el monto de la sanción a imponer, ejercicio que se realiza como sigue:

I. Gravedad de la infracción.

La LFTyR no establece medio alguno para determinar la gravedad; en consecuencia esta autoridad considera conveniente que para determinar cuándo una conducta es grave y en qué grado lo es, es necesario analizar los siguientes elementos:

- i) Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.
- ii) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- iii) Obtención de un lucro o explotación comercial de la frecuencia
- iv) Afectación a un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión previamente autorizado.

Antes de entrar al análisis de los citados elementos, resulta oportuno destacar que los servicios de radiodifusión son considerados servicios públicos de interés general, tanto por la CPEUM como por los criterios sostenidos por el Poder Judicial Federal.

En efecto, de acuerdo con el artículo 6o., apartado B, fracción III, de la CPEUM, la radiodifusión es un servicio público de interés general y corresponde al Estado garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad.

"Artículo 6o.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución."

(Énfasis añadido)

De igual forma lo definió la SCJN en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, donde consideró a la radiodifusión en general como una actividad de interés público, tal como se observa de la siguiente transcripción:

"Se desprende de los artículos transcritos, que los servicios de radio y televisión se consideran como una actividad de interés público..."

La importancia de los servicios públicos radica, entre otros motivos, en que una afectación a su prestación implica necesariamente un daño a la colectividad, por lo que el poder público, dirigido a su fin de bien común, busca ante todo garantizar la correcta prestación de tales servicios.

De lo anterior se desprende la importancia que reviste para el Estado, tanto el uso eficiente de un bien de dominio público de la Nación, como lo es el espectro radioeléctrico, como la prestación de un servicio público de interés general, como en la especie lo es el servicio público de radiodifusión, cumpliendo al efecto con las disposiciones establecidas tanto en la CPEUM como en la LFTyR.

Por lo anterior, el monto de la multa que se imponga debe guardar relación con la naturaleza de la infracción atendiendo al bien jurídico tutelado, que en el presente caso es el uso de un bien de dominio público de la Nación de manera eficiente y la prestación de un servicio público de radiodifusión.

Así, el hecho de que la CPEUM y la LFTyR exijan que se otorgue una concesión para prestar el servicio público de radiodifusión, obedece a que el mismo, al ser un recurso natural limitado, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación, correspondiendo al Estado su rectoría.

En ese sentido, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la expedición de la LFTyR en relación con la gravedad de las infracciones señaló lo siguiente:

"En el título correspondiente a sanciones, se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. En apartado por separado, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

Asimismo, el Dictamen emitido por la Cámara revisora en relación con la citada iniciativa señaló lo siguiente:

"De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado. En la Minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apercibimiento. Con respecto a los porcentajes de sanción, en la Iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que fue intención del Legislador establecer en la LFTyR un sistema de graduación de las conductas de la más leve a la más grave, por lo que en tal sentido resulta evidente que la multa que se pretenda imponer debe ser congruente con dicha estimación.

Hechas las anteriores precisiones, esta autoridad procede a analizar los componentes que determinan la gravedad de la conducta susceptible de ser sancionada.

i) Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.

Si bien en el presente caso no se acredita un daño como tal al Estado, entendido éste como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio del Estado como consecuencia del incumplimiento de una obligación, en el presente caso el Estado resiente un perjuicio, en virtud de que dejó de percibir ingresos por el otorgamiento de una concesión que permitiera la prestación de servicios de radiodifusión de forma regular. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

En términos de lo establecido en el artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, se deben cubrir al Estado por concepto de derechos una cuota por el otorgamiento de concesiones para establecer estaciones de radiodifusión sonora la cantidad de \$29,582.17 (veintinueve mil quinientos ochenta y dos pesos 17/100 M.N.).

En ese sentido resulta evidente que en el presente asunto sí se causa un perjuicio patrimonial al Estado, en virtud de que éste dejó de percibir el pago de los derechos correspondientes por el otorgamiento de la concesión respectiva para la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso o explotación de un bien del dominio público de la Federación, que en este caso lo es el espectro radioeléctrico.

Lo anterior, ya que corresponde de manera originaria al Estado el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y éste puede permitir dicha actividad a los particulares a través de una concesión. Ahora bien para el otorgamiento de dicha concesión, el Estado lo hace a través del ejercicio de una función de derecho público y en consecuencia le corresponde a éste recibir el pago de derechos respectivo.

Bajo esta misma premisa, resulta procede calcular lo que el Estado dejó de percibir por el pago de derechos anual por el uso del espectro para frecuencias de radiodifusión en términos de la ley de la materia, en este sentido, no pasa desapercibido para esta autoridad que en su escrito de manifestaciones y pruebas, [REDACTED] señaló que fue a partir del veinte de noviembre de dos mil trece cuando se instaló y entró en operaciones la estación radiodifusora, por lo que atendido a dicha fecha se concluye que el Estado dejó de percibir el pago de los derechos por el uso de la frecuencia **98.1 MHz** correspondientes a los ejercicios dos mil catorce y dos mil quince, cuyos montos en términos del artículo 242-B de la Ley Federal de Derechos ascienden a las

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



cantidades \$6,150.89 (seis mil ciento cincuenta 89/100 M.N.) por el año dos mil catorce y \$6,673.72 (seis mil seiscientos setenta y tres 72/100 M.N.) por el ejercicio dos mil quince.

Adicionalmente, cabe destacar que dentro del presente análisis se podría considerar como daño la afectación que pudieran sufrir en su caso el mercado, los consumidores o bien la competencia en el sector de radiodifusión, sin embargo en el presente asunto no se identifica que se haya producido el mismo.

II) **El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.**

Del análisis de los autos que integran el presente expediente, se advierte la confesión expresa por parte de [REDACTED] al señalar que ante la necesidad de hacer efectivos sus derechos de libertad de expresión y acceso a la información y advirtiendo que la frecuencia 98.1 MHz no se encontraba siendo utilizada por persona física o moral ni por alguna radiodifusora o por el Estado, la comunidad de Luvianos decidió instalar y operar una pequeña radio comunitaria el veinte de noviembre de dos mil trece, utilizando según su dicho una frecuencia libre 98.1 MHz, de la cual se puede advertir claramente el hecho de que la estación de radiodifusión señalada como LA CALENTANA-MEXIQUENSE operaba la frecuencia de 98.1 MHz, sin contar con el título habilitante respectivo, confirmando con ello la intencionalidad en su actuar.

Con lo anterior y habiéndose acreditado la indebida prestación del servicio público de radiodifusión sin contar con el documento habilitante que lo autorice para ello, se puede presumir la intencionalidad en la comisión de la conducta, pues existen elementos suficientes que desvirtúan la presunción de inocencia a su favor que debe regir en todo procedimiento sancionador.

ELIMINADAS dieciséis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Por lo anterior, se considera que existen elementos suficientes para acreditar el carácter intencional de la conducta aquí sancionada.

iii) **Obtención de un lucro o explotación comercial de la frecuencia**

Del análisis de las constancias que obran en el expediente respectivo, no se desprende la existencia de una explotación comercial de la frecuencia que se detectó en operación, ya que no se cuenta con elementos de convicción que evidencien que [REDACTED] al prestar el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **98.1 MHz**, presta servicios de publicidad o que como parte de su programación se incluyan comerciales pagados, y en este sentido se estima que no es posible acreditar un lucro ni la explotación comercial de su parte, respecto del uso de la frecuencia **98.1 MHz**.

iv) **Afectación a un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión previamente autorizado.**

En el presente caso y derivado de la práctica de la visita de Inspección-verificación al propietario, y/o poseedor y/o responsable, y/o encargado del inmueble, instalaciones y equipos de radiodifusión que opera la frecuencia **98.1 MHz**, en el domicilio ubicado en [REDACTED] con el objeto de "...constatar y verificar si los equipos y/o sistemas de radiodifusión y/o servicios de radiodifusión de LA VISITADA operan en la frecuencia **98.1 MHz** y en su caso si cuenta con instrumento legal vigente emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que justifique su uso legal..." no se desprendió que con motivo de la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **98.1 MHz**, el presunto responsable afectara con ello sistemas de

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente instalados, por lo que tal elemento no se considera actualizado en el presente caso.

Ahora bien, una vez analizados los elementos que integran el concepto de gravedad se considera que la conducta que se pretende sancionar es MEDIANAMENTE GRAVE de conformidad con lo siguiente:

- ✓ Existe la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión correspondiente.
- ✓ Quedó acreditado el carácter intencional de la conducta.
- ✓ No se acredita la obtención de un lucro o la explotación comercial de la frecuencia de radiodifusión.
- ✓ No se detectó la afectación a sistemas de telecomunicaciones o radiodifusión legalmente instalados.

En efecto, del análisis de los elementos antes referidos se desprende que la conducta del infractor reviste determinada gravedad en virtud de que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la Federación de naturaleza escasa, cuyo uso, aprovechamiento y explotación solo es posible a través del otorgamiento de una concesión. En tal sentido, el Estado Mexicano ha tenido a bien encomendar al Instituto regular el uso, aprovechamiento y explotación de dicho espectro con el objeto de que su utilización por parte de los particulares, como es el caso de [REDACTED], sea llevada a cabo bajo condiciones de igualdad y previo cumplimiento de los requisitos que al efecto establezca la ley, no siendo dable ni permisible que los particulares de manera arbitraria e ilegal hagan uso indiscriminado de dicho espectro en perjuicio de quienes observan la legislación en la materia; de ahí que ese uso indiscriminado y en contravención de la normativa estime como reprochable por la legislación aplicable y en consecuencia deba ser sancionado. No obstante al momento de determinar la gravedad de la conducta esta autoridad toma en

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

cuenta que no se acreditó la obtención de un lucro o la explotación comercial de la frecuencia de radiodifusión por parte del presunto responsable; que no se produjo un daño a los mercados o a los consumidores, así como que tampoco se advirtió la afectación o generación de interferencias perjudiciales a sistemas de telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente instalados.

II. Capacidad económica del infractor.

Como ya fue señalado en apartados precedentes de la presente resolución, [REDACTED] no presentó elementos que permitan establecer su capacidad económica.

Siendo importante destacar que para que esta Autoridad estuviera en posibilidad de tomar en cuenta de manera exacta e inequívoca la capacidad económica real del infractor, debía ser éste quien exhibiera dentro del procedimiento que se resuelve las pruebas necesarias para ello, pues el hecho de que esta Autoridad infiera su capacidad económica con base en presunciones, o determine el monto de la sanción a imponer sin poder establecer la capacidad económica de [REDACTED] deviene de la omisión del propio infractor de aportar los comprobantes fiscales que demostraran sus ingresos acumulables durante el ejercicio fiscal de dos mil catorce.

En tal virtud, no existen elementos objetivos que permitan a esta autoridad determinar la capacidad económica del infractor, sin embargo dicha circunstancia es atribuible al infractor habida cuenta de que esta autoridad le dio la oportunidad de que se pronunciara al respecto así como para que proporcionara la documentación fiscal correspondiente.

Dicho criterio ha sido sostenido por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, telecomunicaciones y

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



radiodifusión al resolver los juicios de amparo 1637/2015 y 4/2016, promovidos en contra de resoluciones similares emitidas por este órgano colegiado.

III. Reincidencia

De los registros que obran en el Instituto se constata que, [REDACTED] al momento de cometer la infracción que se sanciona en el presente procedimiento administrativo, no tiene antecedentes de haber incurrido en alguna violación a las disposiciones de la Ley, que hubiera sido sancionada por el propio Instituto, por lo que esta autoridad en el caso que nos ocupa no considera que se acredite el supuesto en análisis.

CUANTIFICACIÓN

Una vez analizados los elementos previstos en la ley de la materia para individualizar una multa, se procede a determinar el monto de la misma en atención a las siguientes consideraciones:

El monto de la multa que en su caso se imponga debe tener como finalidad inhibir la comisión de este tipo de infracciones, siendo ésta una de las razones que motivaron la Reforma Constitucional en la materia.

Al respecto, resulta importante tener en consideración lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a dicha Reforma en la que expresamente se señaló lo siguiente:

"En consistencia con las atribuciones que se otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se establecen las bases de las que deberá ajustarse el régimen de concesiones. Las adiciones propuestas tienen por objeto asegurar que en el otorgamiento de concesiones se atienda, al fin de garantizar el derecho de acceso a la banda ancha y a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones en condiciones de competencia, pluralidad, calidad y convergencia, y optimizando el uso del espectro radioeléctrico."

El régimen de concesiones debe estar basado en una política de competencia efectiva que permita alcanzar en el mediano plazo una cobertura universal así como las mejores condiciones posibles de calidad y precio en los productos y servicios. Se entiende así que la competencia en el sector constituye un instrumento central para asegurar el acceso a las tecnologías de la información y además, en su caso, permite al Estado corregir las fallas de mercado. En concreto, se propone lo siguiente:

La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

De lo señalado en la transcripción anterior se desprende la intención del Constituyente de prever que la LFTyR establezca un esquema efectivo de sanciones con el fin de que la regulación que se emita en la materia sea efectiva.

Al respecto cabe señalar que como antecedente de la Reforma aludida, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ("OCDE") realizó un estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, el cual en la parte que interesa señaló lo siguiente:

"Se debe facultar a la autoridad reguladora para que imponga multas significativas que sean lo bastante elevadas (mucho más altas que las actuales) para que resulten disuasorias y garanticen la observancia de la regulación vigente, así como el cumplimiento de sus objetivos. También debe tener suficientes facultades para requerir información a las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, así como para sancionar a aquellas que no respondan a los requerimientos razonables.

Una limitación importante en el uso de concesiones para controlar el comportamiento es el tipo de sanción. En México, la LFT prevé que el incumplimiento de los términos de una concesión podría llevar a la revocación de la concesión y al cese de operaciones. Ésta no es una opción realista. De hecho, sería difícil encontrar un ejemplo de tales sanciones en toda la OCDE. Es preciso reformar la ley para permitir la imposición de formas intermedias de sanción financiera lo suficientemente

elevadas para que sean disuasivas. Las reformas a la ley también podrían permitir la separación funcional y/o estructural de un incumbente con poder de mercado como sanción por el reiterado incumplimiento, como ha ocurrido en algunos países de la OCDE (p. ej. Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Australia, Nueva Zelanda). La LFT, en la actualidad, establece disposiciones para sancionar a quienes violen sus preceptos. Las multas que pueden imponerse hoy día son muy bajas: fluctúan desde "2 000 a 20 000 salarios mínimos" diarios para violaciones menores, hasta "10 000 a 100 000 salarios mínimos" por transgresiones mayores, como el incumplimiento de obligaciones relativas a la interconexión. Con un salario mínimo diario de 59.82 pesos en la ciudad de México, la sanción máxima que podría imponerse sería de unos 500 000 dólares. Es obvio que las sanciones deben ser proporcionales a la infracción."

Congruente con lo anterior, en la referida reforma el Constituyente consideró necesario que la ley de la materia estableciera un esquema efectivo de sanciones, no sólo en cuanto a los procesos para su imposición, sino también en relación con los montos de las mismas, al considerar que las existentes no eran suficientes para disuadir las conductas infractoras y garantizar la observancia de la LFTyR.

En ese sentido, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la expedición de la LFTyR, en relación con el esquema de sanciones señaló lo siguiente:

"El artículo 28 constitucional recién reformado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, prevé que la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del Título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

Para cumplir este mandato constitucional, la iniciativa que se presenta a esta soberanía propone un esquema de sanciones basados en porcentajes de ingresos de los infractores a fin de homologarlo con el esquema de sanciones establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.

Los porcentajes de ingresos permiten imponer sanciones de manera equitativa, ya que la sanción que se llegue a imponer, incluso la máxima, será proporcional a los ingresos del infractor, lo que evita que llegue a ser ruinosa. En un esquema de sanciones basados en salarios mínimos, se corre

el riesgo que al momento de imponer la sanción, ésta llegue a ser de tal magnitud que pueda exceder incluso, los ingresos del infractor.

Las sanciones por porcentajes de ingresos evitan la posibilidad de excesos en el cálculo del monto de la sanción y al mismo tiempo cumplen su función de ser ejemplares a fin de inhibir la comisión de nuevas infracciones.

Para establecer este tipo de sanciones, es menester contar con la información de los ingresos del infractor, es por esto que se establecen la facultad de requerir al infractor de tal información con apercibimiento que de no proporcionarlo se optará por un esquema de salarios mínimos, el cual también se contempla....

El esquema de salarios mínimos solo aplicará en el caso que no se cuente con la información de los ingresos del infractor.

En el título correspondiente a sanciones, se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. En apartado por separado, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión.
(Énfasis añadido)

Asimismo, el Dictamen emitido por la Cámara revisora en relación con la citada Iniciativa señaló lo siguiente:

"De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado. En la Minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apercibimiento. Con respecto a los porcentajes de sanción, en la Iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

De lo señalado en los procesos legislativos transcritos se advierten las premisas que tomó en consideración el legislador al emitir las disposiciones que regulan la imposición de sanciones en la materia, entre las que destacan las siguientes:

- Establecer un esquema efectivo de sanciones.
- Que las sanciones cumplan con la función de inhibir la comisión de infracciones.
- Que sean ejemplares.
- Que atiendan primordialmente al ingreso del infractor.
- La propia LFTyR contenga una graduación de las conductas.
- Que las multas sean mayores a las que establecía la legislación anterior la cual no cumplió con los fines pretendidos.
- El esquema de salarios mínimos se estableció para el caso de no contar con la información de los ingresos del infractor.

Así, al no contar con la información fiscal del infractor se debe aplicar el esquema basado en salarios mínimos, el cual permite a la autoridad sancionadora determinar el monto de la multa atendiendo a los elementos establecidos en la propia LFTyR.

No pasa desapercibido para esta autoridad que al día en que se emite la presente resolución ya se encuentran vigentes el "DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México" y el "DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", los cuales hacen referencia a la Unidad de Medida y Actualización y al cambio de denominación de la Ciudad de México, sin embargo al tratarse de una conducta

consumada antes de su entrada en vigor, en acato al principio de Irretroactividad de la ley se aplicaron las disposiciones tal y como se encontraban establecidas al momento en que se cometió la conducta.

En ese orden de ideas, resulta importante tener presente que por la comisión de la conducta aquí sancionada, la abrogada Ley Federal de Radio y Televisión establecía en su artículo 103, multa de cinco mil a cincuenta mil pesos, por lo que con la intención de cumplir con los fines de la Ley y la Reforma señalada, el monto que se debe considerar en el presente asunto por la simple comisión de la conducta atendiendo a la gravedad de la misma debe ser superior a lo previsto por la abrogada Ley.

Así es, como fue analizado en páginas precedentes, la conducta sancionada se hace consistir en la prestación de un servicio público de radiodifusión, a través del uso de un bien de dominio público de la Nación como lo es el espectro radioeléctrico, sin contar con concesión alguna, situación que pone de manifiesto la gravedad de la conducta. No obstante lo cual y de acuerdo a las circunstancias particulares del presente caso, se consideró a la misma como MEDIANAMENTE GRAVE, en virtud de que no se acreditó la obtención de un lucro o la explotación comercial de las frecuencias de radiodifusión, ni se determinó la afectación a sistemas de telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente autorizados.

Adicionalmente, para el cálculo de la multa respectiva resulta importante considerar que con dicha conducta se produjo un perjuicio al Estado, en virtud de que este dejó de percibir ingresos por el pago de derechos por el otorgamiento de una concesión y, en su caso, por el uso del espectro.

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

Ahora bien, a efecto de determinar el monto de la multa que resulta aplicable en el presente asunto, hay que tomar en cuenta que como ha quedado señalado en párrafos precedentes, al desconocer los ingresos del presunto infractor, conforme al artículo 299 de la LFTyR, esta autoridad podrá imponer una multa de hasta 82 millones de veces el salario mínimo.

En tal sentido, esta autoridad debe tomar en consideración el momento en que se concretó la conducta que se pretende sancionar para determinar el valor diario de la unidad de medida y actualización, o en su caso, el Salario Mínimo General Diario Vigente ("SMGDV"), que se utilizará para el cálculo y determinación de la misma.

Sentado lo anterior, de conformidad con el último párrafo del artículo 299 de la LFTyR, esta autoridad debe considerar el **SMGDV** en el Distrito Federal del día en que se realice la conducta o se actualice el supuesto, que en la especie es el año dos mil quince, correspondiendo para dicha anualidad un salario que ascendió a la cantidad de \$70.10 (Setenta pesos 10/100 M.N.), tomando como base el resolutive segundo de la *"Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2015"*, publicado en el DOF el veintinueve de diciembre de dos mil catorce.

Por lo anterior, esta autoridad tomando en cuenta los elementos analizados, en relación con la conducta realizada por la Infractora, atendiendo a los motivos y fundamentos que han quedado expuestos a lo largo de la presente resolución y considerando que el monto de la multa debe ser suficiente para corregir su comisión y para inhibirla en lo futuro, procede imponer a [REDACTED], una multa por mil días de **SMGDV** que ascienden a la cantidad de \$70,100.00 (Setenta mil cien pesos 00/100 M.N.), por prestar servicios públicos de

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

radiodifusión sin contar con la concesión correspondiente y con ello usar frecuencias del espectro radioeléctrico.

En relación con lo anterior, es de resaltar que esta autoridad goza de arbitrio para fijar el monto de la multa, atendiendo a lo establecido en los artículos 299, párrafo tercero, fracción IV, y 301 de la LFTyR.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes:

"MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable.

(Época: Novena Época, Registro: 186216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/20, Página: 1172)".

Ahora bien, en virtud de que [REDACTED] no cuenta con la concesión a que se refiere el artículo 66 de la LFTyR para prestar servicios públicos de radiodifusión, se actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la LFTyR.

En efecto, el artículo 305 de la LFTyR, expresamente señala:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

(Énfasis añadido)

ELIMINADAS veinticuatro palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.



En tal virtud, procede declarar la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en: a) una antena omnidireccional sin marca, sin modelo ni número de serie; b) Lap Top Marca Hp, sin modelo ni número de serie; c) un transmisor de fabricación nacional sin marca, sin modelo ni número de serie; d) una mezcladora marca HENYX sin modelo ni número de serie; e) una mezcladora marca AUTECH sin modelo ni número de serie; f) tres micrófonos sin marca sin modelo ni número de serie y g) un CPU sin marca, sin modelo ni número de serie habiendo designando como interventor especial (depositario) de los mismos al C. Raúl Leonel Mulhía Arzuluz, por lo que una vez que se notifique la presente resolución en el domicilio de [REDACTED] se deberá solicitar al interventor especial (depositario) ponga a disposición los equipos asegurados.

En virtud de que quedó plenamente acreditado que [REDACTED] incumplió con lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR, y que en consecuencia se actualizó la hipótesis del artículo 305 del citado ordenamiento, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

R E S U E L V E

PRIMERO. [REDACTED] en su carácter de responsable de la estación de radiodifusión que opera la frecuencia 98.1 MHz, ubicada en el domicilio [REDACTED] es responsable de la violación a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al haberse detectado que se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión a través de la frecuencia 98.1 MHz sin contar con concesión, permiso o autorización otorgado

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

por la autoridad competente, tal como quedó debidamente demostrado en la presente Resolución.

SEGUNDO. De conformidad con lo señalado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la presente Resolución se impone a [REDACTED]

[REDACTED] una multa por mil días de **SMGDV** que asciende a la cantidad de **70,100.00** (Setenta mil cien pesos 00/100 M.N.), por incumplir lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por prestar servicios públicos de radiodifusión sin contar con la concesión correspondiente.

TERCERO. [REDACTED] deberá cubrir ante la Oficina del Servicio de Administración Tributaria que por razón de su domicilio fiscal le corresponda, la multa impuesta dentro del plazo de treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente Resolución, en términos del artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.

CUARTO. Gírese oficio a la autoridad exactora, a fin de que si la multa no es cubierta dentro del término de ley, con fundamento en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, proceda a hacer efectivo el cobro de la misma.

QUINTO. De conformidad con lo señalado en los Considerandos TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la presente Resolución, y toda vez quedo acreditada la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 98.1 MHz en la población de Luvianos, Estado de México, con fundamento en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se declara la pérdida en beneficio de la Nación de los elementos detectados durante el desarrollo de la visita de verificación ordinaria número

ELIMINADAS tres palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

IFT/DF/DGV/1007/2015, como son los equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Antena (omnidireccional)	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	124
Lap Top	HP	Sin modelo	Sin número de serie	125
Transmisor (de fabricación nacional)	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	126
Mezcladora	HENYX	Sin modelo	Sin número de serie	127
Mezcladora	AUTEC	Sin modelo	Sin número de serie	
Tres micrófonos	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	128
CPU	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	129

SEXTO. Se instruye a la Unidad de Cumplimiento, para que a través de la Dirección General de Verificación, comisione a personal adscrito a su cargo para hacer del conocimiento del interventor especial (depositario) la revocación de su nombramiento y en consecuencia ponga a disposición los bienes que pasan a poder de la Nación, previa verificación de que los sellos de aseguramiento no han sido violados y previo inventario pormenorizado de los citados bienes.

SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 35, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena que la presente Resolución se notifique a [REDACTED] en el domicilio precisado en el proemio de la presente Resolución.

ELIMINADAS seis palabras con fundamento en los artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47, primer párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de contener datos personales.

OCTAVO. En términos del artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se informa a [REDACTED] que podrá consultar el expediente en que se actúa en las oficinas de la Unidad de Cumplimiento de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 838, cuarto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03100, (Edificio Alternativo de este Instituto), dentro del siguiente horario: de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 horas y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.


NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de [REDACTED] que la presente Resolución constituye un acto administrativo definitivo y por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 312 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, procede interponer ante los juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, el juicio de amparo indirecto dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


DÉCIMO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los artículos señalados en las Consideraciones Primera y Segunda de la presente Resolución.



Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar
Comisionado Presidente

Ernesto Estrada González
Comisionado


Adriana Sofia Labardini Inzunza
Comisionada


María Elena Estavillo Flores
Comisionada


Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado


Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XVII Sesión Ordinaria celebrada el 16 de junio de 2016, en lo general por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar, Ernesto Estrada González, Adriana Sofia Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja.

En lo particular, la Comisionada Adriana Sofia Labardini Inzunza manifestó voto en contra de los Resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto, y sus respectivas partes considerativas.

Lo anterior, con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFI/160616/305.

El Comisionado Ernesto Estrada González, previendo su ausencia justificada a la sesión, emitió su voto razonado por escrito, de conformidad con el artículo 45, tercer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y artículo 8, segundo párrafo, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.